

DERECHOS HUMANOS

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS - 2009

**Publicado por la Oficina Pro Democracia, Derechos Humanos y Trabajo
Departamento de Estado de los Estados Unidos**

GUATEMALA

11 de marzo de 2010

Guatemala es una república democrática, multipartidaria, con una población de aproximadamente 14 millones de habitantes. Álvaro Colom, del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), ganó la elección presidencial de 2007, considerada por los observadores internacionales como libre y justa en general. El presidente Colom comenzó su mandato de cuatro años en enero de 2008. Aun cuando las autoridades civiles mantuvieron generalmente el control de las fuerzas de seguridad, hubo casos en los que estas fuerzas cometieron actos ilícitos, entre ellos, abusos de los derechos humanos.

En general, el gobierno respetó los derechos humanos de los ciudadanos; sin embargo, persistieron problemas serios muy diversos. Los problemas incluyeron: falta de acción del gobierno para investigar y castigar las ejecuciones ilícitas cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad; violencia social generalizada, incluidos muchos asesinatos; corrupción y deficiencias considerables en los sectores policial y judicial; participación de la policía en delitos graves; impunidad de la actividad delictiva; condiciones carcelarias duras y peligrosas; detenciones y arrestos arbitrarios; falta de acción del sistema judicial para asegurar investigaciones completas y oportunas, y juicios justos; falta de protección a los funcionarios del sector judicial, los testigos y los representantes de la sociedad civil contra la intimidación; amenazas e intimidación de periodistas y sindicalistas, y el asesinato de éstos; discriminación y violencia contra la mujer; trata de personas; discriminación de las comunidades indígenas; discriminación y violencia contra las personas por motivo de su orientación e identidad sexual; y aplicación ineficaz de las leyes laborales y las disposiciones relativas al trabajo infantil.

RESPECTO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Sección 1. Respeto de la integridad de la persona, que incluye el derecho a no ser objeto de:

a. Privación arbitraria o ilícita de la vida

Aun cuando no hubo informes de que el gobierno o sus representantes cometieron asesinatos por motivos políticos, varios miembros de la fuerza policial perpetraron ejecuciones ilícitas. La corrupción, la intimidación y la ineficacia de la policía y otras instituciones impidieron la investigación adecuada de muchas de estas ejecuciones, así como el arresto y enjuiciamiento satisfactorio de los autores. Un informe de Amnistía Internacional emitido el 15 de diciembre describió la participación de la policía y las fuerzas de seguridad en supuestas ejecuciones extrajudiciales, y criticó las demoras o ineficacias de las investigaciones.

La Policía Nacional Civil (PNC) y su Oficina de Responsabilidad Profesional (ORP) informaron que investigaron 17 acusaciones de homicidios en los que participaron 16 agentes de la PNC, quienes seguían bajo investigación a fines del año.

El 20 de enero, las autoridades arrestaron a los agentes de la PNC Mynor Joel Loarca Morales e Isaías Miguel Pineda por el homicidio de Walter García Suruy, cometido el 15 de enero en la Ciudad de Guatemala. Suruy había acusado formalmente a ambos agentes de robo de automóvil. Al final del año, no se contaba con mayor información sobre este caso.

El 14 de abril, personas desconocidas mataron a tiros a Khalil Musa, un destacado empresario y cafetalero, y a su hija Marjorie, en la Ciudad de Guatemala. A fines del año, las autoridades no habían acusado a nadie de estas muertes. El 10 de mayo, Rodrigo Rosenberg Marzano, abogado de la familia Musa, también fue muerto a tiros en la Ciudad de Guatemala. Después de investigaciones exhaustivas, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), patrocinada por las Naciones Unidas, anunció haber concluido que Rosenberg había organizado su propio asesinato. La CICIG también exoneró al presidente Colom y a los colaboradores cercanos de su gobierno de la acusación hecha por Rosenberg en un video filmado justo antes de su muerte, acerca de que ellos habían tramado su asesinato.

En septiembre y octubre, las autoridades arrestaron a 11 miembros de un grupo delictivo organizado, por haber arreglado y

llevado a cabo el asesinato de Rosenberg. Seis de ellos eran miembros activos o ex agentes de la PNC, y uno era un soldado jubilado. El Ministerio Público (MP o la oficina del Procurador General) acusó a cinco personas de asesinato y a cuatro de asociación ilícita, y emitió órdenes para otros más que supuestamente actuaron como intermediarios para Rosenberg en la preparación de su asesinato. A fines del año, tres sospechosos seguían prófugos.

El 27 de mayo, después de que el conductor de un camión en el que viajaba Pedro de Jesús Sacul Pop, de 15 años de edad, no obedeció la orden de detenerse en Alta Verapaz, un grupo de soldados abrió fuego y mataron al menor. El 26 de junio, las autoridades arrestaron a 12 soldados (Leopoldo Chen Tiul, Hugo Cuz Cuz, Audiel Salazar Cortez, Edy Ronal Caal Colay, Rudy Alberto Sarceno, Walter Raúl Ramírez, Mario Enrique Iseem Caal, José Luis López Sánchez, Oscar Aníbal García Ramírez, Javier Cacao Coy, Oscar Ramírez Gudiel y William Augusto Cetino García) por el asesinato. A fines de año, los 12 soldados seguían libres bajo fianza mientras el Ministerio Público continuaba la investigación del caso.

El 4 de julio, la PNC arrestó a tres fiscales del Ministerio Público (Mario Adolfo Soberanis Pinelo, Oscar Efraín Vásquez Fuentes y Rigoberto Arturo Castañón Mejía) y a dos agentes de la PNC (Marlon Josué García López y David Ezequiel Vásquez) por conspirar para obstruir la justicia en los asesinatos de Cástulo y Ana Leticia Vásquez García. Según se informó, el principal sospechoso en el caso (también arrestado el 4 de julio) era el hermano de las víctimas, Jeiner Estanislao Vásquez García. Un video grabado el 16 de junio en casa de Estanislao Vásquez mostraba supuestamente a los fiscales y agentes de la policía arrestados cuando alteraban y destruían pruebas, e intentaban sin lograrlo confiscar dinero y armas. Al final del año, los seis sospechosos seguían en prisión preventiva.

A fines del año, los agentes de la PNC Omar Evidán Godoy Arana y Gendy Misael Chinchilla Samayoa seguían en prisión preventiva por el asesinato del ayudante de autobús José Ángel Hernández, ocurrido en febrero de 2008.

El 3 de febrero, se presentaron cargos contra el ex fiscal de Delitos Contra la Vida del Ministerio Público, Álvaro Matus, por abuso de autoridad e incumplimiento de las responsabilidades de su cargo en las investigaciones del asesinato de Víctor Rivera, ex asesor de un ministro de gobierno y ex jefe de la unidad antisequestros de la PNC, ocurrido en abril de 2008 en la Ciudad

de Guatemala. El 17 y 18 de junio, las autoridades arrestaron a tres auxiliares fiscales del Ministerio Público, Denys Billy Herrera Arita, Carlos Rodríguez Serrano y Pedro Pablo Girón Polanco, y a la subdirectora del MP, Leyla Susana Lemus Arriaga, acusándolos de obstrucción de la justicia y conspiración por la supuesta ayuda que brindaron a Matus. El 28 de diciembre, en una audiencia preliminar, el Tribunal Octavo de Sentencia Penal añadió también obstrucción a la justicia y conspiración a los cargos presentados contra Matus. Al final del año, los cinco sospechosos seguían en prisión mientras continuaban las investigaciones del Ministerio Público.

El 31 de marzo, el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal sentenció a tres ex agentes de la PNC, Juan Carlos Jalal Caal, Julio Roberto Aguirre Martínez e Israel Barco Arana, a 25 años de prisión por el asesinato a tiros de Jorge Eduardo Rivera-Cabezas Klussmann en abril de 2008, quien no obedeció una orden de detenerse.

El 23 de noviembre, el Tribunal de Sentencia Penal de Coatepeque absolvió a tres detectives de la División de Investigación Criminal acusados de los asesinatos de junio de 2008 del ex esposo y el hijo de Edilma Navarajo, alcaldesa de Ocos, San Marcos.

El 16 de febrero, las autoridades arrestaron a Sandro Adrián Ramos Venegas, ex agente de la PNC, por estar involucrado supuestamente en los asesinatos de 16 ocupantes de un autobús nicaragüense al este de Guatemala en noviembre de 2008. El 27 de marzo, el Ministerio Público arrestó a Rony Eduardo Terraza Hernández, un posible miembro de la organización narcotraficante de "El Taquero", por su presunta participación en los asesinatos. Al final del año, los dos sospechosos seguían en prisión preventiva.

A fines del año, los nueve agentes de la PNC arrestados como sospechosos en la presunta ejecución de Antonio de León López, ocurrida en Huehuetenango en 2007 durante una operación antinarcóticos, seguían en prisión preventiva, en tanto que un décimo oficial continuaba prófugo.

No hubo ningún adelanto en los casos del alcalde electo de Jutiapa y ex diputado del Congreso, Manuel Castillo, y su asistente, Carlos Alberto Gutiérrez, quienes fueron detenidos en 2008 por su presunta participación en los asesinatos de tres miembros salvadoreños del Parlamento Centroamericano (PARLACEN)

y su chofer, ocurridos en 2007. Al final del año, Castillo enfrentaba siete cargos y ambos seguían presos.

A fines del año, el ex director de la prisión El Boquerón, Manuel Antonio Recinos Aguirre, el alcaide, Bladimiro Rodene López y López, y varios agentes de la policía supuestamente vinculados con el narcotráfico en Jutiapa seguían en prisión preventiva por el asesinato de cuatro miembros de la PNC, sospechosos en el caso del PARLACEN de 2007.

El 22 de diciembre, la Corte Suprema ordenó la reapertura y reinvestigación de los asesinatos de Jorge Carpio Nicolle, ex candidato presidencial y destacado periodista, y de tres de sus asociados políticos cercanos, ocurridos en 1993. La Corte Suprema realizó lo anterior en cumplimiento de una decisión de 2004 tomada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual concluyó que hubo deficiencias en la investigación anterior llevada a cabo por las autoridades del país. Asimismo, la Corte Suprema ofreció proporcionar seguridad a los testigos, jueces, fiscales y familiares que participaran en el nuevo proceso.

También el 22 de diciembre, la Corte Suprema ordenó la reapertura y reinvestigación de otros dos casos prominentes de derechos humanos. En el primero, conocido como el caso de los "niños de la calle", las fuerzas de seguridad del Estado participaron presuntamente en el secuestro, tortura y asesinato de cinco niños de la calle en 1990. El segundo caso fue conocido como el caso de la "camioneta blanca", en referencia a la camioneta que supuestamente usaron los agentes de seguridad del Estado en el secuestro y asesinato de cinco civiles, durante 1987 y 1988.

A fines del año, a pesar de las órdenes del tribunal, seguían prófugos el ex capitán del ejército, José Antonio Solares González, y los ex miembros de la Patrulla de Autodefensa Civil (PAC), Ambrosio Pérez Laju y Domingo Chen, tres sospechosos buscados por los asesinatos de 177 civiles en Río Negro, Baja Verapaz en 1982.

De acuerdo con las estadísticas de la PNC, durante el año, las pandillas parapoliciales (con mayor frecuencia en las comunidades indígenas rurales) mataron a 49 personas e hirieron a 216 en linchamientos. Muchos observadores atribuyeron los linchamientos a la frustración del público debido a que la policía y las autoridades policiales no lograron garantizar la seguridad, y a la aparición de grupos de seguridad integrados por habitantes del lugar. Continuaron los informes de

linchamientos comunitarios de personas bajo sospecha de violar, secuestrar o intentar secuestrar a niños con el fin de venderlos para adopción. En muchos casos, los agentes de la PNC se rehusaron a intervenir debido a temor por su propia seguridad.

Según informes, el 16 de marzo, miembros de la comunidad de Huehuetenango capturaron, golpearon, torturaron, desmembraron y prendieron fuego a tres presuntos ladrones de motocicleta. Los ciudadanos alegaron que las investigaciones que ellos llevaron a cabo revelaron que los sospechosos eran responsables del robo. El 10 de julio, dos presuntos ladrones fueron linchados en Villa Canales. La policía encontró a una víctima, Manolo Estrada, atada a un poste y muerta a tiros. El 16 de noviembre, habitantes de Chimaltenango quemaron a un agente de la policía acusado de intentos de extorsión. El 27 de noviembre, una turba en Sololá quemó a tres personas, entre ellas, a un joven de 16 años, a quien la PNC había arrestado ese día como sospechoso del asesinato del conductor de un autobús y un pasajero. La muchedumbre también incendió la oficina del gobernador, la estación de la PNC, tres autos de patrulla y una motocicleta. El 4 de diciembre, habitantes de Huehuetenango quemaron a tres personas acusadas de matar a una mujer. El 5 de diciembre, miembros de la comunidad golpearon hasta matar a un hombre acusado de robo en Panajachel, capturaron a sus tres presuntos cómplices, quemaron cuatro vehículos de la policía y una gasolinera, y causaron daños a una estación de la policía y un edificio municipal. La policía liberó a los cómplices poco después.

No hubo adelantos, ni se esperaba ninguno, en el caso de enero de 2008 de la muerte a tiros de un joven de 17 años en San Juan Sacatepéquez debido a que un grupo parapolicial sospechaba que era miembro de una pandilla. El grupo también asesinó al hermano y al padre de la víctima, quienes trataron de interceder.

Asimismo, no hubo avances, ni se esperaba ninguno, en el caso del linchamiento en septiembre de 2008 perpetrado por miembros de la comunidad en San Pedro Yepocapa, Chimaltenango, de un hombre de 22 años acusado de asaltar y robar un autobús de pasajeros, y de violar a cuatro mujeres.

b. Desaparición

No hubo informes de desapariciones por motivos políticos; sin embargo, sí los hubo de participación de la policía en secuestros con el fin de obtener rescate. La Oficina de Responsabilidad Profesional de la PNC informó que, durante el

año, hubo 11 denuncias de secuestros llevados a cabo por personal de la Policía Nacional Civil.

No hubo ningún avance en el caso relacionado con la desaparición del guardia de seguridad Marcos de Jesús García Sarmiento del presunto escondite del ex fugitivo Gustavo Herrera, ocurrida en 2007.

Tampoco se supo de algún progreso en la investigación del Ministerio Público del secuestro en 2007 de Marco Tulio Moreno Ramírez. Según se dice, el secuestro fue cometido por hombres que portaban uniforme tipo PNC.

El 29 de diciembre, en respuesta a una orden de 2002 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Suprema reabrió el caso de la desaparición forzada del líder guerrillero Efraín Bámaca Velásquez, ocurrida en 1992.

El 5 y 6 de marzo respectivamente, las autoridades arrestaron al agente de la PNC Héctor Roderico Rodríguez Ríos, y al agente jubilado de la PNC Abraham Lancerio Gómez, ex miembros de la disuelta Policía Nacional, en relación con el caso de la desaparición forzada del líder sindical Edgar Fernando García, esposo de la diputada Nineth Montenegro. Los sospechosos permanecían presos a fines del año acusados de detención ilegal, secuestro y abuso de autoridad; las autoridades emitieron también órdenes de aprehensión para otros dos sospechosos.

El 31 de agosto, un tribunal de Chimaltenango declaró culpable al ex comisionado militar Felipe Cusanero Coj de las desapariciones forzadas en Choatalum, San Martín Jilotepeque, Chimaltenango, de Lorenzo Ávila, Alejo Culajay, Filomena López, Encarnación López, Santiago Sutuj y Mario Augusto Tay, miembros del grupo indígena maya Kaqchiquel, ocurridas entre 1982 y 1984. El ex comisionado recibió una sentencia de 150 años de prisión.

El 3 de diciembre, un tribunal de Chiquimula declaró culpables al coronel jubilado del ejército Marco Antonio Sánchez Samayoa, y a tres ex comisionados militares, José Domingo Ríos, Gabriel Álvarez Ramos y Salomón Maldonado Ríos, y los sentenció a 53 años de prisión por las desapariciones forzadas en 1981 de las siguientes ocho personas de la aldea El Jute: Jacobo Crisóstomo Cheguen, Miguel Ángel Cheguen Crisóstomo, Raúl Cheguen, Inocente Gallardo, Antolín Gallardo, Valentín Gallardo, Santiago Gallardo y Tránsito Rivera. El tribunal también ordenó investigar al ex ministro de Defensa, Ángel Aníbal Guevara, al ex jefe del Estado Mayor de la Defensa, Benedicto Lucas García, y los oficiales y

soldados del ejército que sirvieron en la base militar de Zacapa cuando ocurrieron las desapariciones.

- c. Tortura y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes

La Constitución y la ley prohíben esas prácticas; no obstante, hubo informes creíbles de tortura, abuso y otros malos tratos cometidos por miembros de la PNC. Típicamente, las denuncias se relacionaron con el uso de fuerza excesiva durante las operaciones policiales.

No hubo avances en el caso de las presuntas palizas que la policía propinó a dos ayudantes de autobús en febrero de 2008.

Condiciones de las prisiones y los centros de detención

Las condiciones en las prisiones continuaron siendo duras y peligrosas, y hubo muchos casos de asesinatos perpetrados por reclusos. Continuaron las carencias graves de recursos del sistema penitenciario, particularmente en cuanto a seguridad carcelaria y servicios e instalaciones de atención médica. Los presos se quejaron de alimentación y atención médica insuficientes. La corrupción fue generalizada, especialmente en relación con la venta y el consumo de drogas ilícitas. Los funcionarios penitenciarios informaron de intentos frecuentes de fuga, peleas entre pandillas y otras manifestaciones de inquietud entre los presos. Según se informó, los presos usaron a menudo teléfonos móviles para exigir pagos de extorsiones, coordinar secuestros a cambio de rescate y asesinatos de conductores y ayudantes de autobús, y dirigir otras actividades delictivas dentro y fuera de la prisión. En varias prisiones, se instaló equipo para bloquear este tipo de llamadas; sin embargo, a fines del año, no había terminado la instalación definitiva para activar el equipo.

El hacinamiento en las prisiones siguió siendo un problema, aun cuando, en septiembre, el gobierno abrió una nueva prisión de alta seguridad con capacidad para 230 reclusos en Fraijanes. De acuerdo con el registro del sistema penitenciario, a mediados de diciembre, 19 prisiones y cárceles diseñadas para recluir a 6.974 personas encerraban a 9.801 reclusos. De la población del sistema penitenciario nacional, cerca del 45% se encontraba en prisión preventiva; 579 eran mujeres adultas, 358 eran varones jóvenes detenidos en tres centros y 31 eran mujeres jóvenes.

La insuficiencia de medidas de seguridad mermó la capacidad del sistema penitenciario para controlar eficazmente a los prisioneros. En todo el país, había sólo 2.144 guardias penitenciarios. Según informes, el 16% de los reclusos pertenecían a pandillas, que tenían una activa función en las prisiones y, en ocasiones, atacaron a los guardias penitenciarios. Los programas de trabajo y educación en prisión fueron inadecuados para rehabilitar a los presos y disminuir la tasa de reincidencia del 90%.

Los medios de información y las organizaciones no gubernamentales (ONG) informaron que el maltrato físico y el abuso sexual de las mujeres y jóvenes prisioneras fue un problema grave. Muchas de las jóvenes prisioneras víctimas de abuso eran presuntos miembros de pandillas.

El 4 de febrero, la PNC arrestó a Jorge Torres, director la prisión preventiva Pavoncito, y a siete guardias penitenciarios por su supuesta complicidad en la fuga del 1 de febrero del preso Leonel Giovanni Herrera Reyes, quien cumplía una sentencia de 50 años por los delitos de violación y homicidio ocurridos en 2003.

El 4 de septiembre, seis reclusos escaparon de la prisión preventiva Quetzaltenango: Byron Alberto Morales Villatoro, Carlos Esteban Galindo Pardo, Wilmer Armando Argueta, José Armando Sapón Ola, y los ex agentes de la PNC, Leopoldo Zaid Castillo Belloso y Bartolomé Teni Cuc, presuntos miembros de una banda de secuestradores. Posteriormente, las autoridades arrestaron a cinco agentes de la PNC, Gonzalo David Morales, Hilario Antonio López, Juan Carlos Méndez, José Pedro Rojas y Francisco Javier Agustín, quienes supuestamente ayudaron a la fuga.

En septiembre, el ministro de Gobernación despidió a 37 empleados del sistema penitenciario, entre ellos, el director, el alcaide, el administrador y guardias de la prisión El Boquerón, y ordenó que fueran investigados porque presuntamente permitieron a los reclusos bajo su control la posesión de dinero, armas y drogas. Además, trasladó a los líderes de pandillas a la nueva prisión de alta seguridad en Fraijanes. Posteriormente, los incidentes en represalia, aparentemente coordinados, incluyeron más de 35 disparos con un AK-47 hechos por agresores desconocidos contra el edificio del sistema penitenciario, los asesinatos en la Ciudad de Guatemala de un guardia penitenciario y del alcaide de la cárcel El Progreso, y el asesinato del alcaide y un guardia de la cárcel de Chimaltenango. El 31 de

octubre, agresores desconocidos mataron a tiros a un guardia penitenciario, e hirieron a dos más en la Ciudad de Guatemala. Lo mismo sucedió en las afueras de la ciudad, donde atacantes desconocidos dispararon y mataron a un guardia e hirieron a otros dos. La PNC y el Ministerio de Gobernación a cargo del sistema penitenciario atribuyeron estos ataques a represalias por los intentos del Ministerio de frenar la actividad de las pandillas en las prisiones. Específicamente, el Ministerio de Gobernación atribuyó los ataques al líder pandillero encarcelado, Jorge Yair de León Hernández, quien supuestamente dirige una organización delictiva desde la prisión El Boquerón.

A fines del año, no se supo de avances en la investigación del Ministerio Público del caso de 2007 de la guardia penitenciaria, Irma Barrientos, quien supuestamente prostituía a las prisioneras en Jalapa y extorsionaba una comisión del dinero que recibían los presos.

En contadas ocasiones, se mantuvo juntos a hombres y mujeres detenidos en instalaciones de migración. A veces, los detenidos en prisión preventiva estuvieron en las mismas secciones de la prisión que la población general penitenciaria e, inusualmente, se mantuvo juntos a jóvenes y adultos.

El gobierno permitió las visitas de vigilancia a las prisiones de grupos locales e internacionales de derechos humanos, la Organización de los Estados Americanos, defensores públicos, grupos religiosos y familiares. Estas visitas se realizaron durante todo el año.

d. Arresto o detención arbitraria

La Constitución y la ley prohíben las detenciones y los arrestos arbitrarios; sin embargo, hubo informes creíbles de arrestos sin órdenes judiciales, de detenciones ilícitas y de incumplimiento de los límites de tiempo permitidos en los procesos jurídicos. En la práctica, a veces, los agentes encargados de la detención no llevaron a los sospechosos ante los jueces en el plazo de seis horas que exige la ley, y en ocasiones, los jueces no celebraron una audiencia en el plazo de 24 horas que exige la ley.

Función de la policía y del aparato de seguridad

La PNC, integrada por 19.465 miembros y encabezada por un director general nombrado por el Ministro de Gobernación, siguió careciendo de personal y financiamiento suficientes, y de

capacitación adecuada. A diciembre, la PNC informó del fallecimiento de 65 miembros de su personal, 30 de ellos en el cumplimiento del deber.

Aun cuando no hubo miembros activos del ejército prestando servicio en la estructura de mando de la policía, el gobierno siguió empleando al ejército para apoyar a las unidades de la policía en respuesta al aumento de la delincuencia. En las zonas con alto índice de criminalidad y en otros lugares de la Ciudad de Guatemala, continuaron las operaciones conjuntas de la policía y el ejército, bajo control operacional de la PNC.

La corrupción policial siguió siendo un problema grave, y hubo acusaciones fidedignas de participación de determinados agentes de la policía y de algunas unidades de la policía en actividades delictivas, entre ellas, violaciones, asesinatos y secuestros. Se informó que oficiales de la policía y de migración extorsionaron y maltrataron a las personas que intentaron ingresar en el país de manera ilegal.

El 7 de agosto, el presidente Colom despidió al director general de la PNC, Porfirio Pérez Paniagua, y a tres de sus altos colaboradores (el subdirector general, Rolando Santis, el subdirector de operaciones, Víctor de Jesús López, y el subdirector de investigaciones, Héctor David Castellanos Soto) debido a sospechas de haber dirigido un intento de robo de más de 2.200 libras (1 tonelada) de cocaína el 6 de agosto, durante una operación antinarcoóticos en la Ciudad de Guatemala. El 18 de agosto, las autoridades arrestaron a Orlando Evangelista Villatoro Alvarado, el jefe de operaciones de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la PNC, en relación con el intento de robo. A fines del año, no se había ejecutado la orden de aprehensión contra Castellanos, y el Ministerio Público seguía investigando a Pérez Paniagua y los demás oficiales de la PNC.

El 28 de agosto, las autoridades arrestaron a Pérez Paniagua y a dos comisarios de la PNC, Benigno López Fuentes y Mario Roberto Castillo, por cargos separados del robo de \$350.000 en efectivo que, el 10 de junio, la PNC había confiscado originalmente en Chimaltenango.

La impunidad de la policía siguió siendo un problema serio. De forma rutinaria, la PNC transfirió a los agentes bajo sospecha de haber cometido un delito, en lugar de investigarlos y castigarlos.

Hubo informes fidedignos de que agentes de la PNC o personas disfrazadas de agentes de la policía detenían automóviles y autobuses para exigir sobornos o robar bienes particulares. En algunos casos, los supuestos agentes de la policía asaltaron y violaron a las víctimas.

El 21 de septiembre, el Tribunal Segundo de Sentencia Penal dictó sentencias de prisión de cinco a ocho años para el jefe de la PNC, Elías Lemus Guerra, el subinspector, José López Hernández, y los agentes Jorge García Ortiz y Dennis Gueiry Godínez por la detención ilegal en abril de 2008 de Eleazar Rodas, en la Ciudad de Guatemala, así como por amenazas, robo y abuso de autoridad.

No hubo avances en el caso de septiembre de 2008 de dos subcomisarios de la PNC detenidos, y de otros 12 agentes de la PNC que están siendo investigados por el Ministerio Público, por la supuesta participación en un grupo delictivo de la Ciudad de Guatemala.

La policía amenazó a personas dedicadas a la prostitución y a otras actividades del comercio sexual con falsas acusaciones relacionadas con drogas para extorsionarles dinero o favores sexuales, y hostigó a personas gays, lesbianas y travestis con amenazas similares. Los críticos acusaron a la policía de realizar detenciones indiscriminadas e ilícitas al llevar a cabo operaciones contra pandillas en algunos barrios con altos índices de criminalidad. Supuestamente, los agentes de seguridad arrestaron y mantuvieron detenidos a presuntos miembros de pandillas sin órdenes o, en ocasiones, con cargos falsos relacionados con drogas.

La Oficina de Responsabilidad Profesional realizó investigaciones internas de agentes de la policía por mala conducta. Durante el año, la OPR informó haber recibido 776 denuncias, entre ellas, 17 de asesinatos, 3 de desapariciones forzadas, 11 de secuestros, 6 de detenciones ilícitas, 80 de robos, 3 de violaciones, 81 de amenazas y 323 de casos de abuso de autoridad.

La Oficina de Responsabilidad Profesional envió al Ministerio Público para realizar más investigaciones y para enjuiciar los casos con suficientes pruebas de actividad delictiva; sin embargo, pocos casos llegaron a juicio. A fines del año, la ORP había investigado a 69 agentes de la policía. La PNC no proporcionó cifras sobre la resolución de estos casos, algunos de los cuales seguían en espera a fines del año.

La PNC capacitó a 3.770 cadetes en los temas de derechos humanos y ética profesional, en comparación con los 2.810 que recibieron esta capacitación en 2008. El ejército exigió que los oficiales a cargo de asuntos civiles en cada comando planificaran y documentaran la capacitación sobre derechos humanos proporcionada a los soldados. De acuerdo con los datos proporcionados por el Ministerio de Defensa, a fines del año, 5.760 oficiales y soldados del ejército habían recibido formación sobre derechos humanos.

Aproximadamente, dos terceras partes de los distritos policiales seguían teniendo personal insuficiente. Los defensores de los derechos de los indígenas aseveraron que la continua falta de sensibilidad de las autoridades de seguridad hacia las normas y prácticas culturales de los indígenas generó malentendidos. Asimismo, presentaron quejas acerca de que pocos agentes de la policía indígenas trabajaban en sus propias comunidades étnicas o lingüísticas.

Procedimientos para arrestos y trato durante la detención

La Constitución y la ley exigen que se presente una orden de arresto emitida por un tribunal a un sospechoso antes de detenerlo, a menos que al sospechoso se le sorprenda cometiendo el delito. La policía no puede detener a un sospechoso por más de seis horas sin llevar el caso ante un juez. Con frecuencia, a los detenidos no se les informó con prontitud de los cargos presentados en su contra. Una vez que se presenta al sospechoso ante el juez, el fiscal suele tener tres meses para terminar la investigación y presentar el caso ante el tribunal o solicitar una prórroga formal del período de detención. La ley contiene disposiciones sobre el acceso a abogados y sobre la fianza para la mayoría de los delitos. El gobierno proporcionó representación legal a los detenidos indigentes, y los detenidos tuvieron contacto con los miembros de su familia.

A fines del año, la Oficina de Responsabilidad Profesional había recibido seis acusaciones de detenciones ilegales. No hubo datos confiables sobre el número de detenciones arbitrarias, aunque la mayoría de los informes indicaron que, de forma rutinaria, las fuerzas policiales hicieron caso omiso de los mandatos judiciales de habeas corpus en los casos de detención ilegal, en especial, durante las operaciones contra pandillas en los vecindarios.

En las zonas con un alto índice de criminalidad de la Ciudad de Guatemala, Mixco y Villa Nueva, el gobierno continuó operando tres proyectos piloto de juzgados de 24 horas, los cuales redujeron considerablemente el número de casos sobreseídos por falta de bases jurídicas o por razones técnicas, y aumentaron la tasa de enjuiciamientos en la zona metropolitana de la Ciudad de Guatemala. Las estadísticas de fin de año del proyecto de juzgados de 24 horas en la Ciudad de Guatemala indicaron que sólo el 9,4% de quienes fueron llevados ante el tribunal fueron liberados debido a la falta de bases jurídicas del caso o por razones técnicas, en comparación con el 77% de quienes fueron liberados por estos motivos en 2005, antes de establecer el proyecto de juzgados de 24 horas. Estos proyectos mejoraron también la capacidad del gobierno para cumplir con los requisitos jurídicos de llevar a los sospechosos ante un juez en las seis horas siguientes a la detención inicial.

La ley establece un límite de tres meses para la prisión preventiva; no obstante, a los prisioneros se les mantuvo a menudo detenidos después de la fecha estipulada para llevarlos a juicio o dejarlos en libertad. Algunos prisioneros no fueron liberados oportunamente después de haber cumplido sus sentencias completas debido a que los jueces no emitieron la orden necesaria del tribunal o a otros problemas burocráticos. Un juez tiene la facultad de determinar si es necesario o permisible fijar fianza para los detenidos en prisión preventiva, según las circunstancias de los cargos.

e. Negación de un juicio público justo

Aun cuando la Constitución y la ley disponen un poder judicial independiente, el sistema judicial con frecuencia no llevó a cabo juicios justos u oportunos debido a ineficiencia, corrupción, insuficiencia de personal y fondos, e intimidación de jueces, fiscales y testigos. Los delitos más graves no se investigaron ni castigaron. Muy pocos delitos declarados fueron enjuiciados, y el número de fallos condenatorios fue aún menor. Un estudio de la Fundación Myrna Mack, publicado en julio, indicó que, entre principios de 2006 y mediados de 2008, el Ministerio Público presentó cargos formales en el 3% de los 13.342 casos de homicidio. Muchos casos penales prominentes siguieron pendientes en los juzgados durante períodos prolongados, ya que los abogados de la defensa presentaron apelaciones y peticiones consecutivas.

El 17 de julio, el Congreso aprobó una prórroga de dos años para el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en

Guatemala (CICIG), hasta el 11 de septiembre de 2011. Las Naciones Unidas y el gobierno convinieron en establecer la CICIG dirigida por las Naciones Unidas para investigar y enjuiciar casos que impliquen la intervención delictiva del Estado, y para promover las reformas del estado de derecho.

Durante el año, el Congreso también aprobó y puso en vigor leyes de reforma destinadas a hacer más transparente la selección de los jueces de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones. En la selección de 13 jueces de la Corte Suprema, llevada a cabo el 30 de septiembre, una comisión especial preparó una lista de 26 candidatos extraídos de los 250 nombres que habían sido clasificados de acuerdo con criterios legislativos. A pesar de las denuncias públicas de ocho de los 26 candidatos presentada por el Comisionado de la CICIG, Carlos Castresana, el Congreso eligió a seis de los ocho candidatos denunciados. No obstante, el 7 de octubre, después de ser objeto de críticas internacionales, el Congreso revirtió parcialmente su decisión sobre tres de los seis jueces que Castresana había señalado como no calificados, y los reemplazó por otros tres de la lista de 26 candidatos.

Hubo muchos informes sobre corrupción, ineficacia y manipulación del poder judicial. Continuaron los informes de jueces, fiscales, demandantes y testigos sobre amenazas, intimidación y vigilancia. A fines del año, el fiscal especial para delitos contra los trabajadores judiciales recibió 68 casos de amenazas o agresiones contra los trabajadores del poder judicial, en comparación con 129 casos en 2008.

El Ministerio de Gobernación asignó agentes de la policía a la CICIG para aumentar la seguridad, y la unidad de fiscales creada por el Ministerio Público e investigada por la CICIG siguió siendo supervisada directamente por un fiscal superior de la CICIG. A fines del año, la CICIG continuaba su investigación de 15 casos prominentes, 39 enjuiciamientos y varios casos relacionados con asesinatos de mujeres, conductores y ayudantes de autobús, trata de personas y atentados contra sindicalistas y defensores de los derechos humanos, y ejecuciones de personas de estos dos últimos grupos.

El 4 de julio, Leopoldo Liu, jefe de la fiscalía del Ministerio Público contra el lavado de dinero, renunció después de recibir amenazas de muerte.

El 10 de septiembre, pistoleros no identificados mataron a tiros al agente de la PNC, Dimas Godoy, cuando éste los sorprendió

intentando entrar en la residencia del jefe de fiscalía del Ministerio Público contra el crimen organizado, Rony López.

Hubo informes fidedignos sobre asesinatos de testigos.

El 3 de septiembre, un tribunal absolvió a Juan Ignacio Monzón Guillén, Gabriel Ruche Pixtún, William Donald Hernández y Marvin Leonel Coc, miembros de la pandilla Monzón, de todos los cargos en el asesinato de Blanca Leticia Amperez Velásquez, una testigo protegida en el caso contra el líder de pandilla, Wilfredo Monzón Guillén, ocurrido el 8 de enero.

El 16 de febrero, pistoleros no identificados intentaron asesinar a Sandro Ramos Vanegas, un testigo protegido en el caso de 2008 de los asesinatos en el autobús nicaragüense, en la Ciudad de Guatemala.

El 18 de mayo, en Mazatenango, pistoleros desconocidos mataron a Nery Ángel Urizar García, ex agente de la unidad de inteligencia del ejército y testigo en el caso de la desaparición forzada de Efraín Bámaca.

No se tiene conocimiento de ningún avance en el caso del asesinato en 2007 de Dalia Evangelina García Illescas, testigo en el juicio por asesinato contra el agente de la PNC, Jorge Macario Mazariegos.

Según se afirma, el Juez del Tribunal Undécimo de Primera Instancia, Eduardo Cojulún, siguió recibiendo amenazas de muerte durante todo el año por su asistencia en el caso presentando por Rigoberta Menchú ante la Audiencia Nacional Española, en colaboración con otras ONG, contra cinco oficiales militares jubilados y dos civiles por presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas durante el conflicto interno.

No hubo ningún adelanto en el caso ocurrido en la Ciudad de Guatemala en marzo de 2008 de los asesinatos de Ingrid Judith Borrayo, oficial de la División de Homicidios del Ministerio Público, y del agente de la PNC, Hugo Rolando Toj, quien había sido asignado a la División de Derechos Humanos del Ministerio de Gobernación, perpetrados por agresores desconocidos. De acuerdo con el Ministerio Público, la investigación sigue abierta oficialmente, aunque los dos sospechosos principales del caso murieron en incidentes separados durante el año.

Tampoco hubo ningún avance en el asesinato ocurrido en mayo de 2008 del juez José Vidal Barillas Monzón, presidente de la Sala

de Apelaciones de Retalhuleu, perpetrado por pistoleros no identificados. El juez Barillas había presidido casos relacionados con el crimen organizado, el narcotráfico y conflictos de tierras.

Tampoco hubo avance en el caso del asesinato perpetrado por agresores desconocidos en julio de 2008 del auxiliar fiscal de delitos contra la vida, Juan Carlos Martínez, jefe de la fiscalía en los casos del PARLACEN y el asesinato de Víctor Rivera.

La Corte Suprema siguió buscando la suspensión de jueces y realizando investigaciones penales por deshonestidades o irregularidades en los casos dentro de su jurisdicción. La Unidad de Régimen Disciplinario investigó 165 denuncias de delitos, y celebró las audiencias de 55 denuncias durante el año, pero no proporcionó cifras sobre la resolución de casos.

Con frecuencia, los fiscales fueron ineficientes, y siguieron siendo vulnerables a la intimidación y la corrupción.

El poder judicial está integrado por la Corte Suprema de Justicia, los tribunales de apelación, los tribunales de sentencia y los jueces encargados de determinar causa probable (con una función similar a la de un gran jurado), así como los tribunales de jurisdicción especial, entre ellos, los tribunales de trabajo y de familia. En todo el país, hubo 388 jueces de paz. Algunos de los jueces se especializan en administrar el derecho tradicional e indígena en los juzgados comunitarios, los cuales se encuentran dentro de la jurisdicción de la Corte Suprema. La Corte de Constitucionalidad, que estudia la legislación y las decisiones de los tribunales para determinar su compatibilidad con la Constitución, es independiente del resto del poder judicial.

A fines del año, el Ministerio Público tenía a 196 personas en su programa de protección de testigos.

Procedimientos de juicio

La Constitución dispone el derecho a un juicio público justo, la presunción de la inocencia, el derecho de estar presente en el juicio y el derecho de contar con un abogado. Los acusados y sus abogados tienen acceso a las pruebas que tenga el gobierno pertinentes a su caso. La ley contiene disposiciones para una sentencia acordada, la posibilidad de liberación bajo fianza y el derecho de apelación. Los fallos son emitidos por grupos de

tres jueces. La ley establece disposiciones para juicios orales y exige la interpretación a su idioma para quienes la necesitan, en particular, para el gran número de personas indígenas que no dominan el español, aunque los fondos insuficientes del gobierno limitaron la aplicación efectiva de este requisito. El Ministerio Público empleó a 20 intérpretes en todo el país, incluso en zonas de conflictos anteriores, y el Instituto de Defensa Pública Penal empleó a 35 defensores públicos bilingües en lugares donde también podían servir como traductores.

El Ministerio Público, que actúa de forma semiindependiente del poder ejecutivo, puede iniciar un procedimiento penal por sí mismo o en respuesta a una demanda. Los grupos particulares pueden participar en el enjuiciamiento de casos penales como demandantes. Las investigaciones prolongadas y las frecuentes peticiones procesales empleadas, tanto por la defensa como por la fiscalía, dieron lugar a menudo a detenciones preventivas excesivamente prolongadas y demoraron los juicios por meses o años.

Presos y detenidos por motivos políticos

No hubo informes de presos ni detenidos por motivos políticos.

Procedimientos y recursos judiciales civiles

La ley no establece disposiciones sobre juicios por jurado en asuntos civiles. No obstante, dispone recursos administrativos y judiciales para supuestos agravios, entre ellos, la ejecución de las órdenes de tribunales nacionales; no obstante, hubo problemas al ejecutar estas órdenes. La falta de ejecución oportuna de las órdenes de protección por parte de la PNC dio lugar a algunos asesinatos.

Restitución de bienes

En noviembre de 2008, el Presidente firmó un acuerdo con los líderes del grupo de familias que perdieron parientes durante las masacres de Río Negro a principios de los años 80, conocido como Coordinadora de comunidades afectadas por la construcción de la represa de Chixoy. En el acuerdo, el gobierno reconoció que hubo "daños e infracciones", y asumió la responsabilidad de proporcionar reparación a las familias de las víctimas. Una comisión presidencial especial siguió trabajando en un plan para implementar este acuerdo.

- f. Injerencia arbitraria en la vida privada, la familia, el domicilio o la correspondencia

La Constitución y la ley prohíben esos actos y, en general, el gobierno respetó estas prohibiciones en la práctica.

A fines del año, continuaba el juicio por espionaje del ex jefe de seguridad presidencial, Carlos Quintanilla, quien se entregó voluntariamente en diciembre de 2008, en conexión con el descubrimiento de dispositivos de escucha en las oficinas del Presidente y la Primera Dama. El 8 de enero, acusado de cargos similares, el ex jefe de la Secretaría de Análisis Estratégico, Gustavo Solano, se entregó voluntariamente y, a fines del año, permanecía bajo arresto domiciliario en espera de juicio.

No hubo ni se esperaba ningún avance en los casos de allanamiento de la morada de Ruth del Valle en noviembre de 2008, comisionada presidencial de los derechos humanos, y los allanamientos de las oficinas de tres ONG en 2007.

Sección 2. Respeto por las libertades civiles, incluso:

- a. Libertad de expresión y prensa

La Constitución y la ley disponen la libertad de expresión y prensa y, en general, el gobierno respetó estos derechos en la práctica.

Los medios de información independientes, entre ellos, las organizaciones internacionales de noticias, operaron libre y activamente, y expresaron una amplia variedad de puntos de vista sin restricción abierta del gobierno. No obstante, durante el año, algunos miembros de la prensa informaron haber sido presionados por diversos funcionarios públicos. Algunos propietarios y miembros de los medios de información acusaron también al gobierno de seguir una política publicitaria discriminatoria, en especial, con respecto a los principales medios de impresión y transmisión que expresaron noticias o comentarios percibidos como crítica contra el Presidente, su gobierno, la Primera Dama o funcionarios públicos y programas.

Los miembros de la prensa afirmaron que los niveles cada vez mayores de impunidad y violencia en el país, en particular, asociados con el narcotráfico, amenazaron la práctica del periodismo libre y abierto. La prensa también denunció amenazas hechas contra ellos por el crimen organizado y las

organizaciones de narcotraficantes, señalando que las amenazas aumentaron su sensación de vulnerabilidad.

Durante el año, la fiscalía especial de la Unidad de Delitos contra Periodistas y Sindicalistas recibió 39 denuncias de ataques y otros actos de intimidación contra periodistas. El Ministerio Público informó de 24 incidentes de intimidación de periodistas, en comparación con 10 casos en 2008. En un informe de 2008 presentado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se clasificó al país como un "país de riesgo" para los periodistas, de acuerdo con la violencia contra los medios de información y las violaciones de la libertad de expresión.

El 1 de abril, pistoleros desconocidos mataron al periodista de Telecentro 13, Rolando Santis, en la Ciudad de Guatemala, e hirieron al camarógrafo, Juan Antonio de León Villatoro, que le acompañaba.

El 6 de junio, un agresor desconocido mató a tiros al corresponsal del noticiero Telediario, Marco Antonio Estrada Orla, en Chiquimula.

El 1 de septiembre, el vicepresidente Rafael Espada presentó una acusación de difamación contra la periodista, Marta Yolanda Díaz Durán, quien lo acusó en una columna de opinión de haberse reunido con el abogado Rodrigo Rosenberg días antes de que éste fuera asesinado el 10 de mayo (ver la sección 1.a.).

No hubo ningún avance en los siguientes casos:

- El asesinato en mayo de 2008 del corresponsal de Prensa Libre, Jorge Mérida Pérez, en Coatepeque, Quetzaltenango, después de que informara de corrupción en el municipio de Coatepeque y de la supuesta conexión del alcalde con el narcotráfico.
- El caso de amenaza de muerte en julio de 2008 del corresponsal de noticias de Prensa Libre, Danilo López, quien informó sobre la corrupción en la oficina del gobernador de Suchitepéquez.
- El ataque a tiros en julio de 2008 contra la casa del corresponsal de noticias de Radio Punto, Edin Rodelmiro Maaz Bol, en Cobán.

- El intento de asesinato en 2007 del corresponsal, Wilder Jordan, de Nuestro Diario.
- La investigación de las amenazas anónimas de muerte en 2007 contra el personal de Guatevisión y sus familias, debido a la cobertura de los asesinatos del PARLACEN.

Libertad de uso de Internet

No hubo restricciones gubernamentales al acceso a Internet ni informes de que el gobierno vigilara el correo electrónico o las salas virtuales de conversación (*chat rooms*) en Internet. Los principales medios de impresión y transmisión, y un número cada vez mayor de organizaciones pequeñas y medianas de noticias presentaron ediciones en Internet y operaron con libertad. Varias personas y grupos participaron en la expresión pacífica de sus opiniones por Internet, incluso por correo electrónico. La Unión Internacional de Telecomunicaciones informó que, en 2008, cerca de 14% de la población tuvo acceso a Internet.

El 14 de mayo, después del asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg, las autoridades arrestaron al usuario de Twitter, Jean Ramsés Anleu Fernández, y lo acusaron de causar pánico financiero en su mensaje de correo electrónico *tweet*, en el que instaba a los clientes del Banco de Desarrollo Rural a cerrar sus cuentas bancarias. La Superintendencia de Bancos afirmó que el mensaje causó el retiro de 525 millones de quetzales (cerca de \$66 millones). El 8 de junio, la Sala Tercera de Apelaciones emitió una decisión de falta de fundamentos y concluyó que el *tweet* no causó pánico financiero.

Libertad académica y acontecimientos culturales

El gobierno no impuso limitaciones a la libertad académica ni a los acontecimientos culturales.

b. Libertad de reunión y asociación pacíficas

Libertad de reunión

La Constitución y la ley establecen disposiciones sobre la libertad de reunión y, por lo general, el gobierno respetó estos derechos en la práctica; no obstante, hubo algunas acusaciones de que la policía hizo uso innecesario de fuerza o de falta de acción policial durante manifestaciones violentas.

Libertad de asociación

La Constitución y la ley contienen disposiciones relativas a la libertad de asociación y, en la mayoría de los casos, el gobierno respetó este derecho en la práctica.

c. Libertad de culto

La Constitución establece la libertad de culto y, en general, el Gobierno respetó este derecho en la práctica.

Abusos y discriminación en grupos sociales

No hubo informes de abusos ni de discriminación en grupos sociales contra personas por sus creencias o prácticas religiosas. Tampoco hubo informes de actos antisemíticos. La población judía alcanzó un total de 2.000 personas aproximadamente.

Para un análisis más detallado, consultar el Informe internacional sobre la libertad de culto de 2009 (2009 *International Religious Freedom Report*) en el sitio www.state.gov/g/drl/rls/irf.

d. Libertad de movimiento, personas desplazadas internamente, protección de los refugiados y personas apátridas

La Constitución y la ley disponen la libertad de movimiento dentro del país, los viajes al extranjero, la emigración y la repatriación y, en general, el gobierno respetó estos derechos en la práctica.

El gobierno cooperó con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y otras organizaciones humanitarias.

La ley prohíbe el exilio forzado.

Protección de los refugiados

El país forma parte de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados. La Constitución y la ley disponen la concesión de asilo o condición de refugiado, y el gobierno estableció un sistema para ofrecer protección a los refugiados. En la práctica, el gobierno proporcionó protección contra la expulsión o el regresos de refugiados a países donde su vida o su libertad se

verían amenazadas por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política.

Durante el año, el gobierno recibió seis solicitudes de condición de refugiados, y convino en conceder protección temporal, asilo o condición de refugiado a una persona.

Sección 3. Respeto a los derechos políticos: el derecho de los ciudadanos a cambiar de gobierno

La Constitución y la ley establecen el derecho de los ciudadanos a cambiar su gobierno de manera pacífica, y los ciudadanos ejercieron este derecho en la práctica por medio de elecciones periódicas, libres y justas, celebradas según el sufragio casi universal de las personas de 18 años de edad o más. No se permite que los miembros de las fuerzas armadas y de la policía voten.

Elecciones y participación política

En 2007, Álvaro Colom del partido de la UNE resultó electo para un mandato presidencial de cuatro años con cerca del 53% de los votos. La misión internacional de observación de la Organización de los Estados Americanos calificó las elecciones como libres y justas en general. Amnistía Internacional informó de 26 asesinatos aproximadamente de activistas políticos relacionados con la elección.

El Congreso de 158 escaños contó con 20 mujeres. Un total de 197 mujeres fungieron como jueces en todo el país, entre ellas, una en la Corte Suprema y otra en la Corte de Constitucionalidad. No hubo mujeres entre los 12 miembros del gabinete. Asimismo, hubo seis mujeres entre los 332 alcaldes del país.

Hubo un miembro indígena en el gabinete, ningún indígena entre los jueces de la Corte Suprema, 113 alcaldes indígenas y cerca de 20 miembros indígenas en el Congreso. Desde mediados de 2008, un destacado líder indígena ha presidido la Oficina de Derechos Humanos en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Sección 4. Corrupción oficial y transparencia del gobierno

Se consideró ampliamente que la corrupción del gobierno es un problema serio. Los indicadores de gobernanza del Banco Mundial señalaron que la corrupción en el gobierno fue un problema grave. El Ministerio Público siguió investigando los cargos de corrupción contra el ex presidente Alfonso Portillo, el ex

vicepresidente Reyes López y otros altos funcionarios de gobiernos anteriores.

El 27 de marzo, la policía arrestó al general jubilado Enrique Ríos Sosa, al capitán Pedro Adolfo Catalán Muñoz y al teniente jubilado Miguel Ángel Salguero Torres por cargos de falsificación de documentos y malversación de 471 millones de quetzales (cerca de \$59 millones) de 2001 a 2003, durante el gobierno del presidente Portillo. Posteriormente, se entregaron voluntariamente otros tres sospechosos del caso: el coronel jubilado Sergio Hugo Cárdenas Sagastume; el capitán de la marina Rodolfo Leonel Chacón Álvarez, comandante de la Escuela Naval; y el coronel Luis Alberto Gómez Guillermo.

El 25 de junio, las autoridades arrestaron al ex ministro de Defensa y ministro de gobierno, Eduardo Arévalo Lacs, por cargos de malversar fondos del ejército por un valor de 120 millones de quetzales (\$15 millones aproximadamente) en 2001. Al final del año, el ex ministro seguía en prisión preventiva.

Habiendo renunciado a su cargo en agosto de 2008, después de reconocer que su secretario privado, Byron Sánchez, había transferido ilegalmente 82,8 millones de quetzales (cerca de \$11 millones) de fondos públicos a Mercado de Futuros (MDF), una casa de bolsa privada, el ex presidente del Congreso, Eduardo Meyer, demoró su juicio por malversación de fondos y permaneció bajo arresto domiciliario. A fines del año, Raúl Girón, gerente general y representante legal de MDF, quien se entregó voluntariamente en agosto de 2008, seguía en prisión preventiva acusado de lavado de dinero y fraude. Sánchez y el ex director financiero del Congreso, José Conde, también buscados en este caso, continuaban prófugos a fines del año.

El 26 de noviembre, las autoridades arrestaron al ex presidente del Congreso, Rubén Darío Morales, por cargos de malversación de fondos y fraude basados en que, supuestamente, recibió una comisión de 300.000 quetzales (\$38.000 aproximadamente) por invertir fondos del congreso en MDF en 2007. El 3 de diciembre, el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal puso a Morales bajo arresto domiciliario con una fianza de 400.000 quetzales (\$50.000) mientras el Ministerio Público continuaba las investigaciones.

El 27 de octubre, el Tribunal Décimo de Sentencia Penal dictó una sentencia de 14 años de prisión al ex diputado Héctor Loaiza Gramajo, por cargos de lavado de dinero, fraude y evasión fiscal relacionados con el robo de camiones de gasolina en 2006.

El ex presidente Portillo siguió acusado de malversación de fondos perpetrado supuestamente durante su gobierno (2000 - 2004); sin embargo, se pospuso el inicio de su juicio debido a apelaciones. Al finalizar el año, continuaba libre bajo fianza.

Los funcionarios públicos que ganan más de 8.000 quetzales al mes (cerca de \$1.000) o quienes administran fondos públicos deben cumplir con las leyes de divulgación de información financiera que vigila y aplica la Oficina de la Contraloría General de Cuentas. La falta de voluntad política y la impunidad generalizada facilitaron la corrupción gubernamental.

La Constitución concede a los ciudadanos el derecho de acceso a información pública. Una ley de 2008 que entró en vigor en abril regula el suministro de la información que mantienen las instituciones públicas, y facilita el acceso a la misma. La ley cubre los tres poderes del gobierno; exige que todas las entidades públicas y privadas que reciben fondos públicos respondan a las solicitudes presentadas por el público de información sobre sus operaciones y la administración de recursos; y establece sanciones por obstruir el acceso del público. No obstante, la prensa criticó al gobierno por no ofrecer recursos suficientes para permitir que las oficinas de gobierno y las que reciben fondos públicos cumplieran plenamente con la nueva ley. El capítulo de Transparencia Internacional del país señaló que el acceso del público a información del gobierno ha disminuido desde 2006, y que la aplicación de la ley de 2008 fue lenta.

Sección 5. Actitud del gobierno respecto a la investigación internacional y no gubernamental de presuntas violaciones de los derechos humanos

Varios grupos nacionales e internacionales de derechos humanos trabajaron generalmente sin restricción del gobierno, investigando y publicando sus resultados sobre casos de derechos humanos. En general, los funcionarios públicos se mostraron dispuestos a cooperar y a considerar el punto de vista de esos grupos.

El 16 de febrero, la representante especial de las Naciones Unidas para la situación de los defensores de los derechos humanos emitió un informe sobre su visita de seguimiento al país en febrero de 2008, en el que expresó gran preocupación "por el deterioro del entorno en que operan los defensores de los derechos humanos, el cual se caracteriza por la impunidad

endémica de los delitos y las infracciones" contra estos derechos. La representante recomendó que el gobierno organice un programa político de derechos humanos, tome medidas para legitimizar el trabajo de los defensores de los derechos humanos, institucionalice los procesos de consulta con la sociedad civil, garantice la coordinación entre los organismos de investigación, reforme las medidas de protección de testigos y de la policía, supervise la implementación de las recomendaciones de la CICIG, proteja al personal de la defensoría pública y asigne fondos a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).

En la ejecución parcial de la decisión de la Corte de Constitucionalidad de marzo de 2008 acerca de levantar el secreto de cuatro planes de contrainsurgencia militar de principios de los años 80, el 6 de marzo, el Ministerio de Defensa entregó dos planes (Victoria 82 y ocho de las más de 200 páginas que se calcula que tiene el plan Firmeza 83) y afirmó que se extraviaron los otros dos planes (operaciones Sofía e Ixil). A fines del año, continuaban las investigaciones del Ministerio Público y de la Comisión Presidencial para la Desclasificación de Archivos Militares.

En una decisión tomada en noviembre de 2008, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) responsabilizó al gobierno de las desapariciones forzadas de María Tiu Tojín y su hija, ocurrida en 1990. La CIDH reconoció que el gobierno había cumplido con algunas de sus recomendaciones, entre ellas, la entrega de una carta de disculpa a la familia de las víctimas, el pago de 2.000.000 de quetzales (\$259.000) a los familiares y la construcción de un monumento en memoria de las víctimas. No obstante, la CIDH determinó que el gobierno no había hecho lo suficiente para establecer la identidad de los responsables ni para localizar los restos de las víctimas.

El 22 de diciembre, la Corte Suprema decidió reabrir cuatro casos prominentes de derechos humanos de las décadas de los años 80 y 90 (ver la sección 1.a.).

Muchas ONG, defensores de los derechos humanos y varios sindicalistas informaron de amenazas o intimidación llevadas a cabo por personas desconocidas, muchas con presuntos vínculos con el crimen organizado, empresas de seguridad privada y grupos de "limpieza social". Asimismo, denunciaron que el gobierno hizo poco para investigar estos informes o para prevenir otros incidentes.

La ONG Unidad de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEUGUA), informó que, hasta agosto, hubo 10 asesinatos de defensores de los derechos humanos. Los informes indicaron que miembros de la policía, agentes en servicio o ex agentes, estuvieron implicados en algunos de los asesinatos. El 21 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió medidas precautorias para la directora, Iduvina Hernández, y los miembros de la ONG, Asociación para el Estudio y la Promoción de la Seguridad en Democracia, y pidió al gobierno protección para ellos en vista de las amenazas vinculadas con sus actividades.

El 29 de septiembre y el 31 de diciembre, la activista de los derechos humanos Norma Cruz, indicó que había recibido repetidas amenazas de muerte por pedir a las autoridades el enjuiciamiento de Juan José Santos Barrientos, acusado de matar a Francisca Ayala Pinto y a Carlos Cruz Pineda el 11 de mayo. Francisca Ayala fue un testigo clave en el juicio de Estuardo Ayala Casasola, quien fue declarado culpable el 25 de abril de violación de una menor de 13 años de edad.

El 18 de octubre, personas desconocidas atacaron y mataron a Fausto Leonel Otzín Poyón, abogado de los derechos humanos y promotor de los derechos de la comunidad maya, en San Juan Comalpa, Chimaténango. A fines del año, continuaba la investigación, pero no se había nombrado ni arrestado a ningún sospechoso.

No hubo ningún avance en las investigaciones del Ministerio Público en los siguientes casos que la UDEFEGUA resaltó como ejemplos de violencia e intimidación contra defensores de los derechos humanos:

- La amenaza de muerte en marzo de 2008 contra el obispo Álvaro Ramazzini, defensor de las comunidades rurales en conflictos de tierras.
- La amenaza de muerte en agosto de 2008 contra el líder indígena Amílcar Pop, presidente de la Asociación de Abogados Mayas de Guatemala.
- El asesinato en agosto de 2008 en Colotenango, Huehuetenango, del líder de las comunidades indígenas Antonio Morales López, miembro del Comité de Unidad Campesina y activista de los derechos indígenas en la defensa de los recursos naturales contra proyectos de explotación minera.

- La amenaza de muerte en octubre de 2008 contra un miembro de la familia de Norma Cruz, directora de la Fundación Sobrevivientes, en la Ciudad de Guatemala.

La Fiscalía de Derechos Humanos abrió casos nuevos relacionados con amenazas anónimas por teléfono o por escrito, agresiones físicas y vigilancia de lugares de trabajo, residencias y movimientos vehiculares. La mayoría de estos casos siguieron pendientes durante períodos prolongados sin ser investigados, o cayeron en el olvido en el sistema judicial, debido a que los abogados de la defensa presentaron peticiones y apelaciones consecutivas para demorar los juicios.

A fines del año, Erwin Gudiel Arias seguía detenido en espera de la orden de un tribunal de apelaciones para un nuevo juicio por el asesinato en 2007 de José Emanuel Méndez Dardón, hijo del ex diputado y líder de los derechos humanos, Amílcar Méndez.

La oficina residente del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos asesoró y ayudó al gobierno, y supervisó la situación de los derechos humanos. El gobierno cooperó con la oficina y con otras organizaciones internacionales, entre ellas, la CICIG.

El titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Sergio Morales, cuyo cargo de cinco años concluye en 2012, informa por ley al Congreso y supervisa los derechos humanos que establece la Constitución. La PDH actuó sin interferencia del gobierno ni de partidos, contó con la cooperación del gobierno y emitió informes y recomendaciones que fueron dados a conocer al público, entre ellos, un informe anual al Congreso sobre el cumplimiento de su mandato.

El 24 de marzo, el PDH divulgó su primer informe oficial sobre el proyecto de los archivos de la Policía Nacional, El derecho a saber (*The Right to Know*). El informe dio a conocer de manera específica el caso de la desaparición forzada en 1984 de un líder sindicalista, perpetrada supuestamente por miembros activos y jubilados de la PNC, a quienes las autoridades arrestaron a principios de marzo. A fines del año, los presuntos responsables permanecían detenidos (ver la sección 1.b.).

El 8 de abril, la CIDH concedió medidas precautorias al director y los empleados de la Procuraduría de los Derechos Humanos, y pidió al gobierno protección para ellos en vista de las amenazas

vinculadas con la publicación de los archivos históricos de la policía.

La Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (COPREDEH), dirigida por Ruth del Valle, tiene la responsabilidad de formular y promover la política de derechos humanos del gobierno, representar al gobierno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y negociar resoluciones amistosas en los casos llevados ante la CIDH. Durante el año, la COPREDEH también dirigió la coordinación de la protección policial de varios activistas laborales y de derechos humanos.

La Comisión de Derechos Humanos del Congreso redacta leyes sobre asuntos de derechos humanos y ofrece asesoramiento al respecto. Por ley, se exige que todos los partidos políticos representados en el Congreso tengan un representante en la Comisión. Las ONG informaron que consideraban que la Comisión es un foro público eficaz para promover y proteger los derechos humanos.

Sección 6. Discriminación, abuso social y trata de personas

La Constitución y la ley prohíben la discriminación por motivo de raza, sexo, discapacidad, idioma o condición social. En la práctica, el gobierno no aplicó estas disposiciones a menudo, debido a recursos insuficientes, corrupción y un sistema judicial disfuncional.

Mujeres

Los delitos sexuales siguieron siendo un serio problema. La ley penaliza la violación, incluso la violación conyugal y la violación con agravantes, y establece sanciones de 5 a 50 años de prisión. Una ley de 2008 establece penas por la comisión de violencia física, económica y psicológica contra la mujer por motivo de su sexo. Según informes, a fines del año, continuaba la investigación de 1.512 casos de violencia económica y 2.033 casos de abuso sexual y otras formas de violencia física.

Fue mínima la formación que recibió la policía, o su capacidad para investigar los delitos sexuales o para ayudar a las víctimas de los mismos. El gobierno mantuvo la Unidad Especial de la PNC para delitos sexuales, la Oficina de Atención a la Víctima, la Fiscalía de Delitos contra la Mujer y una unidad especial para los delitos de trata de personas y adopciones ilegales dentro de la Fiscalía contra el Crimen Organizado. En ocasiones, las víctimas de violación no denunciaron el delito

por falta de confianza en el sistema de justicia y por temor a represalias.

La violencia contra la mujer, incluida la violencia intrafamiliar, siguió siendo un problema común y serio. La ley prohíbe el maltrato en el hogar y contiene disposiciones para la emisión de órdenes de protección contra los supuestos agresores y para brindar protección policial a las víctimas. Además, exige que la PNC intervenga en las situaciones de violencia en el hogar. Sin embargo, en la práctica, la PNC no respondió frecuentemente a las solicitudes de asistencia relacionadas con violencia intrafamiliar. Los grupos de mujeres comentaron que pocos agentes han recibido capacitación para tratar casos de violencia intrafamiliar o para prestar ayuda a las víctimas.

El Instituto de la Defensa Pública Penal siguió prestando asistencia jurídica, médica y psicológica gratuita a las víctimas de violencia intrafamiliar. Al final del año, el proyecto había atendido 13.375 casos de violencia intrafamiliar.

Según los informes de prensa, el Programa de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar, subordinado a la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente, recibió 565 llamadas diarias de mujeres y niños golpeados, por medio de sus tres líneas directas de emergencia. A fines del año, el Ministerio Público informó haber recibido más de 31.641 denuncias de violencia contra mujeres y niños, entre ellas, casos de violencia intrafamiliar, violencia económica y delitos sexuales. De las 5.097 denuncias de delitos sexuales, al final del año, el gobierno informó que hubo 242 fallos condenatorios. El Ministerio Público no proporcionó datos sobre penas impuestas.

Los jueces de paz emitieron un número no especificado de órdenes de protección contra agresores de violencia intrafamiliar, y ordenaron protección policial para las víctimas. Normalmente, la investigación completa y el enjuiciamiento de casos de violencia intrafamiliar y violación tardaron un año en promedio. Aun cuando la ley brinda protección, incluso albergue, a las víctimas de violencia intrafamiliar, en la práctica no hubo suficientes instalaciones para este fin.

La Defensoría de la Mujer Indígena, con sede dentro de la COPREDEH, prestó servicios sociales a las víctimas de violencia intrafamiliar o social, y servicios jurídicos, de mediación y de resolución de conflictos a las mujeres indígenas. Esta oficina también coordinó y promovió las acciones de las instituciones gubernamentales y de las ONG para prevenir la violencia y la

discriminación contra las mujeres indígenas, pero no contó con suficientes recursos humanos ni con capacidad logística para desempeñar sus funciones en todo el país. No hubo estadísticas seguras disponibles sobre el número de casos que la oficina manejó.

Según informes, continuaron los asesinatos de todo tipo, incluso algunos con pruebas de agresión sexual, tortura y mutilación de mujeres. La ONG Grupo Guatemalteco de Mujeres informó que 721 mujeres fueron asesinadas entre enero y el 22 de noviembre. La PNC informó que hubo un total de 6.498 asesinatos durante el año, entre ellos, 720 asesinatos de mujeres, en comparación con el total de 6.292 asesinatos, incluidos los de 687 mujeres en 2008. Durante el año, hubo 219 enjuiciamientos por asesinatos de mujeres en la Ciudad de Guatemala, pero en pocos de ellos se lograron fallos condenatorios.

El Ministerio de Gobernación siguió operando ocho albergues para víctimas de malos tratos en los departamentos que tienen la mayor incidencia de violencia intrafamiliar. Los centros ofrecieron apoyo jurídico y psicológico, y alojamiento temporal. La línea directa del Instituto de la Defensa Pública Penal para asistencia de las mujeres víctimas de violencia física recibió cerca de 60.113 llamadas durante el año.

La prostitución es legal, pero procurar prostitutas e inducir a una persona a la prostitución son delitos que pueden dar lugar a multas o prisión, con sanciones mayores si hay menores implicados. La trata de mujeres y menores, principalmente con fines de prostitución, es ilegal y fue un problema ampliamente reconocido. Hubo informes dignos de crédito acerca de complicidad de agentes de la policía y del servicio de migración con la trata o con la filtración de información sobre redadas inminentes en prostíbulos y otros establecimientos de comercio sexual dirigidas a objetivos delincuentes.

La ley no prohíbe el acoso sexual, y no hubo cifras precisas de su incidencia. No obstante, las organizaciones de derechos humanos informaron que el acoso sexual fue generalizado, en especial, en las industrias donde la fuerza laboral era principalmente femenina, como en los sectores de textiles y del vestuario. El acoso sexual también fue un problema en la fuerza policial.

Las personas y las parejas tuvieron el derecho de decidir el número, el espaciamiento y el momento de concepción de los hijos. El 30 de octubre, el gobierno aprobó una regulación destinada a

aplicar la ley de planificación familiar mediante acceso a información sobre el tema y a educación sexual en todo el sistema de salud pública. La Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica solicitaron prohibiciones del tribunal contra la implementación de la regulación pero no lo lograron antes de que terminara el año. De acuerdo con datos de las Naciones Unidas, dos tercios de los partos en la ciudad y el 30% de los nacimientos en las zonas rurales fueron atendidos por personal capacitado. El 82% de las mujeres tuvo al menos una visita de atención prenatal, pero no hubo datos disponibles sobre atención posparto. En general, hombres y mujeres tuvieron igual acceso a servicios de diagnóstico y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH.

Aun cuando la ley establece el principio de igualdad entre los sexos, en la práctica, las mujeres afrontaron discriminación en el trabajo y tuvieron menos probabilidades de ocupar cargos gerenciales. Las mujeres estuvieron empleadas principalmente en trabajos de baja remuneración en la agricultura, el comercio minorista, el sector de servicios, las industrias textil y del vestuario, y el gobierno. Las mujeres tuvieron mayor probabilidad que los hombres de obtener empleo en el sector informal, donde la remuneración y los beneficios fueron menores generalmente. Las mujeres pueden legalmente ser propietarias, administrar y heredar bienes al igual que los hombres, incluso en situaciones donde hay divorcio.

La Secretaría Presidencial de la Mujer asesoró al Presidente sobre la coordinación interinstitucional de las políticas que afectan a la mujer y su desarrollo. Las actividades de la Secretaría incluyeron seminarios, servicios de extensión e información sobre la discriminación contra la mujer.

En la Ciudad de Guatemala, un refugio para mujeres víctimas de la violencia siguió funcionando durante el año, con capacidad para albergar a 20 víctimas y sus familias por seis meses a la vez.

Niños

La ciudadanía proviene de haber nacido en el territorio nacional y de los padres de la persona. El ACNUR informó que hubo problemas para el registro de nacimientos, especialmente en las comunidades indígenas, debido a sistemas gubernamentales insuficientes de registro y documentación. Los factores culturales, como la necesidad de viajar a zonas urbanas desconocidas y de tratar con funcionarios de gobierno del sexo

masculino no pertenecientes a la población indígena, impidieron a veces el registro de las mujeres indígenas mismas y de sus hijos. En ocasiones, la falta de registro limitó el acceso de los niños a los servicios públicos.

La Constitución y la ley disponen la educación gratuita y obligatoria para todos los niños hasta el noveno grado; sin embargo, menos de la mitad de la población mayor de 13 años ha terminado la educación primaria. Las tasas de terminación de la primaria fueron menores en las zonas rurales e indígenas.

El maltrato infantil siguió siendo un problema grave. La Unidad de la Niñez y Adolescencia Víctima, establecida por la Oficina de la Fiscalía de la Mujer, investigó los casos de maltrato infantil, y logró 43 fallos condenatorios en los 364 casos de maltrato infantil que abrió entre enero y diciembre.

La Secretaría de Bienestar Social, que supervisa los programas de trato, capacitación, educación especial y bienestar infantil, proporcionó albergue y asistencia a los niños que fueron víctimas de maltrato, pero en ocasiones los colocó bajo el cuidado de albergues en donde había jóvenes con antecedentes penales.

Las autoridades investigaron y enjuiciaron cerca de 90 casos de secuestro o compra de niños, algunos de ellos de más de un niño, con el fin de ofrecerlos en adopción.

Hubo informes creíbles de matrimonios forzados de menores de edad en algunas comunidades indígenas rurales.

La prostitución infantil siguió siendo un problema. El turismo sexual infantil no fue un problema generalizado, aunque hubo informes fidedignos de cierta actividad de este tipo en Antigua y en la Ciudad de Guatemala. La edad mínima para las relaciones sexuales consensuales es de 18 años. La Ley Contra la Violencia Sexual, la Explotación y la Trata de Personas, aprobada en febrero, dispone sentencias de 13 a 24 años en prisión, según la edad de la víctima, por tener relaciones sexuales con menores de edad. La ley también prohíbe la pornografía infantil y establece sanciones de seis a diez años en prisión por producción, promoción y venta de pornografía infantil, y de dos a cuatro años de prisión por posesión de la misma.

El gobierno llevó a cabo 65 operaciones de rescate durante el año, que dieron lugar al rescate de cerca de 30 menores de 18 años sometidos a explotación sexual. La Secretaría de Bienestar

Social manejó 1.052 casos de protección infantil, incluidos los casos de menores sexualmente explotados, como parte de un plan nacional para combatir la explotación sexual comercial de los niños.

Hubo estimaciones fidedignas que indican que el número de niños pertenecientes a pandillas callejeras llegó a 3.000 en todo el país. Muchos niños de la calle abandonaron el hogar debido a que fueron maltratados. Con frecuencia, los delincuentes reclutaron a niños de la calle para robo, transporte de contrabando, prostitución y actividades ilícitas relacionadas con drogas. La ONG Grupo de Apoyo Mutuo informó que, hasta julio, 28 menores murieron de manera violenta en todo el país. Las ONG que trabajan con pandillas y otros jóvenes informaron de su preocupación acerca de que los jóvenes de la calle detenidos por la policía fueron objeto de trato abusivo, incluso agresión física.

El gobierno operó un albergue para niñas en Antigua y uno para niños en San José Pinula. Otros dos albergues en Quetzaltenango y Zacapa recibieron tanto a niños como a niñas. Los fondos asignados por el gobierno a los albergues no fueron suficientes, y con frecuencia, las autoridades gubernamentales prefirieron enviar a los jóvenes a albergues juveniles manejados por las ONG. El gobierno no proporcionó asistencia financiera a estas ONG para cubrir los costos de albergue. Las autoridades de seguridad encarcelaron a los jóvenes delincuentes en centros de detención separados para jóvenes.

Trata de personas

La ley prohíbe la trata de personas; sin embargo, la trata fue un problema importante, y hubo informes de trata de hombres, mujeres y niños hacia y desde el país, y dentro y a través del país. La ley penaliza la trata de personas para todo fin, y define las categorías de personas responsables de este tipo de delitos. El 18 de febrero, el Congreso aprobó una ley de reforma contra la violencia sexual, la explotación y la trata de personas, que establece sentencias de prisión de 8 a 18 años y multas de 300.000 a 500.000 quetzales (de \$38.000 a \$63.000 aproximadamente) para los culpables de trata de personas con fines de explotación sexual o laboral. No obstante, el gobierno hizo poco por aplicar la ley después de que entró en vigor en marzo, y el financiamiento para las actividades contra la trata siguió igual o disminuyó.

El país fue lugar de procedencia, tránsito y destino de ciudadanos nacionales y de otros países centroamericanos que fueron víctimas de trata con fines de explotación sexual y trabajos forzados. Hubo trata de mujeres y niños para explotación sexual dentro del país y con destino a México y los Estados Unidos. También hubo trata de niños para explotación laboral, incluso para bandas de limosneros en la Ciudad de Guatemala; sin embargo, no se contó con cifras confiables sobre el alcance del problema.

La ONG ECPAT para la eliminación de la prostitución, la pornografía y la trata infantil con fines sexuales informó en 2008 que los niños de 8 a 14 años de edad eran vendidos por 750 a 1.500 quetzales (de \$90 a \$190 aproximadamente) para trabajar en diversas actividades económicas, mayormente sometidos a explotación sexual comercial. Según la ECPAT, es probable que los incidentes de trata de personas y venta de niños con fines de explotación sexual en 2008 hayan aumentado debido a tasas más altas de desempleo y al aumento del número de personas que viven en condiciones de extrema pobreza.

La trata fue un problema particularmente en los pueblos situados a lo largo de las fronteras del país. Los niños de migrantes guatemaltecos y de otros países centroamericanos, que no iban acompañados por sus padres al entrar a México, recurrieron con frecuencia a la prostitución o se vieron forzados a ella. Muchas mujeres y niños también fueron introducidos al país procedentes de El Salvador, Nicaragua y Honduras por redes del crimen organizado que los obligaron a ejercer la prostitución. Los principales grupos objetivo para la explotación sexual fueron los de niñas y mujeres jóvenes provenientes de familias pobres. En marzo, los medios de información de Honduras informaron de cuatro menores hondureños localizados en Guatemala que fueron víctimas de explotación sexual comercial y trata. La policía guatemalteca arrestó a cuatro sospechosos.

Las organizaciones dedicadas a la trata incluyeron desde negocios familiares hasta redes internacionales muy organizadas. Con frecuencia, los propietarios de prostíbulos en México, Belice y los Estados Unidos fueron responsables del transporte y uso de las víctimas de trata. En ocasiones, los tratantes tuvieron vínculos con otros delitos organizados, incluso el tráfico de drogas y el contrabando de migrantes.

A menudo, los tratantes se acercaron a las víctimas con promesas falsas de compensación económica, trabajos en cafeterías o salones de belleza, o de empleo en otros países, y usaron

volantes, anuncios en diarios y recomendaciones verbales o personales.

El Ministerio Público operó una unidad especial dentro de la Fiscalía contra el Crimen Organizado para investigar y enjuiciar la trata. Un grupo especial, formado por el Ministerio Público, la PNC y autoridades de migración, realizó un número no especificado de redadas en bares y otros establecimientos comerciales.

Las unidades de la PNC y del MP a cargo de combatir la trata tuvieron una carencia grave de personal y de fondos. La escasa capacidad institucional, la infiltración del crimen organizado, la corrupción sistémica, la limitación de recursos para ayudar a las víctimas y la falta de testigos dispuestos a ayudar al enjuiciamiento también impidieron las tentativas del gobierno. A fines del año, la Unidad contra la Trata de Personas perteneciente al Ministerio Público recibió e investigó 400 casos de trata, en comparación con 136 en 2008. Durante el año, el Ministerio Público enjuició, y los tribunales sentenciaron, a siete personas por delitos de trata.

Hubo informes fidedignos de que algunos agentes de la policía y del servicio de migración fueron cómplices de la trata de personas. La ECPAT informó que algunos menores víctimas de trata sostuvieron que los oficiales de migración aceptaron sobornos de los tratantes, proporcionaron a las víctimas documentos falsos de identificación y les permitieron que cruzaran las fronteras. Hubo informes creíbles de que algunos propietarios de prostíbulos permitieron que agentes de la policía y del servicio de migración tuvieran relaciones sexuales con víctimas menores de edad sin cobrarles.

Las organizaciones humanitarias y de la sociedad civil proporcionaron todos los servicios destinados especialmente a las víctimas de trata. No obstante, los albergues operados por la Secretaría de Bienestar Social del gobierno en Antigua, San José Pinula, Quetzaltenango y Zacapa con el fin de alojar a las víctimas de maltrato en el hogar y abandono, y de ofrecer servicios sociales, capacitación para el trabajo y asesoramiento, también proporcionaron servicios a las víctimas de trata. Durante el año, el albergue de la ONG Casa del Migrante atendió a 966 víctimas de trata, entre ellos, varios casos relacionados con menores. También durante el año, uno de los albergues principales para víctimas de trata en la Ciudad de Guatemala, Casa Alianza, cerró por motivos financieros. Su organización central, Covenant House, planificó reabrir un albergue en 2010.

En general, los oficiales de migración deportaron a los adultos extranjeros víctimas de trata y no los trataron como delincuentes. Los oficiales de migración deportaron a Honduras, Nicaragua y El Salvador a un número indeterminado de mujeres que fueron halladas en redadas de bares. No se enjuició a las víctimas ni se les exigió testificar contra los tratantes.

La Comisión Interinstitucional de Combate a la Trata de Personas y sus Delitos Conexos, dirigida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, con un total de 27 entidades que incluyen representantes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como ONG y organizaciones internacionales, coordinó iniciativas para combatir la trata. El gobierno participó en un plan regional para combatir la trata de personas y la explotación sexual comercial de niños y adolescentes.

El gobierno prestó mayor atención al rescate de menores de la explotación sexual comercial en bares, prostíbulos y otros establecimientos. Los menores fueron enviados a diversas ONG, donde se les proporcionó albergue, tratamiento médico, terapia psicológica y capacitación para el trabajo.

El país cooperó con México para ayudar a las víctimas en ambos países. La cooperación incluyó asegurar que la repatriación de las víctimas de trata se manejara de forma separada de las deportaciones. El país tuvo convenios con El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica y Panamá para la repatriación de menores víctimas de trata.

El Ministerio Público colaboró con la ECPAT para capacitar a los funcionarios de gobierno en el tema de los delitos de explotación sexual y comercial, con énfasis en la trata de niños. La EPCAT impartió varios cursos a más de 1.410 funcionarios de gobierno en todo el país, pero el gobierno sólo llevó a cabo una tentativa mínima de capacitar a los funcionarios de justicia en la nueva ley sobre trata.

El informe anual del Departamento de Estado sobre la trata de personas, titulado *Trafficking in Persons Report* puede consultarse en www.state.gov/g/tip.

Personas con discapacidades

La Constitución no contiene prohibiciones específicas contra la discriminación por motivo de discapacidad física en el empleo, la educación, el acceso a la atención médica o la prestación de

otros servicios estatales. Sin embargo, la ley exige igualdad de acceso a instalaciones públicas y contiene disposiciones sobre algunas otras protecciones legales. En muchos casos, las personas con discapacidades físicas y mentales no gozaron de estos derechos, y el gobierno dedicó pocos recursos a abordar el problema.

Hubo recursos mínimos para la educación de personas con necesidades especiales, y la mayoría de las universidades no se hicieron accesibles a las personas con discapacidades. El Hospital Nacional de Salud Mental, el principal proveedor de servicios de atención médica para las personas con enfermedades mentales, no contó con suficientes suministros básicos, equipo, condiciones de vida higiénicas y dotación suficiente de personal profesional. El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, integrado por representantes de los ministerios y organismos de gobierno correspondientes, se reunió periódicamente para analizar las iniciativas, y contó con un presupuesto de cinco millones de quetzales (\$610.000 aproximadamente).

Poblaciones indígenas

Los indígenas de 22 grupos étnicos constituyeron cerca del 43% de la población. La ley dispone la igualdad de derechos para las personas indígenas, y obliga al gobierno a reconocer, respetar y promover sus estilos de vida, costumbres, tradiciones, organizaciones sociales y forma de vestir.

Algunas personas indígenas lograron altos puestos como jueces y funcionarios de gobierno; no obstante, estuvieron generalmente subrepresentados en la política y permanecieron en gran parte fuera de la escena mayoritaria política, económica, social y cultural del país debido a oportunidades educativas limitadas, pobreza, falta de conocimiento de sus derechos y discriminación generalizada. Aun cuando la población indígena aumentó su participación política, algunos representantes de la sociedad civil pusieron en duda si esa participación dio lugar a mayor influencia en la estructura de los partidos políticos nacionales. A menudo, las tierras indígenas no fueron demarcadas eficazmente, y con frecuencia, generaron títulos de propiedad problemáticos.

El 4 de marzo, la Defensoría de la Mujer Indígena anunció que la abogada Sandra Santos López había sido apuñalada cuando salía de un juzgado en Chimaltenango donde intervino en un caso relacionado con los derechos de las mujeres indígenas.

El 27 de octubre, personas desconocidas mataron al maestro de escuela indígena, Adolfo Ich Chamán, e hirieron a siete manifestantes más que se habían reunido para protestar el desalojo de miembros de la comunidad que se rumoreaba llevaría a cabo la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) de las tierras en disputa cerca de El Estor, Izabal. Las autoridades emitieron una orden para el arresto de Mynor Padilla, quien encabezaba la fuerza de seguridad privada de la CGN en El Estor en el momento de la muerte de Chamán. A fines del año, Padilla seguía prófugo.

De acuerdo con Amnistía Internacional, el 2 de septiembre, la policía expulsó de sus hogares a unos 80 miembros de la comunidad indígena maya Q'eqchi, en las comunidades de Bella Flor, y el 8 de agosto, en el municipio de Alta Verapaz, quemaron casas, destruyeron cosechas e intentaron violar a una niña de 15 años. Según se informa, el conflicto de tierras subyacente seguía sin resolver porque los supuestos terratenientes no asistieron a las negociaciones.

Según informes, el 12 de octubre en la Ciudad de Guatemala, durante una protesta contra la política agraria del gobierno, un pistolero disparó y mató a un trabajador rural indígena e hirió a otros dos.

La ONG Human Rights First señaló una tendencia a penalizar los movimientos sociales, en especial, las movilizaciones comunitarias en contra de proyectos industriales de gran escala que podrían tener efectos desfavorables en los medios de vida de la comunidad. Varios miembros de las comunidades indígenas de San Juan Sacatepéquez han sido arrestados en los últimos años por oponerse a la construcción de una fábrica de cemento. En julio de 2008, las autoridades emitieron órdenes de arresto contra ocho personas debido a un conflicto entre un terrateniente y una compañía de explotación minera, el segundo conflicto en 18 meses en el que se seleccionó como objetivos del arresto a los residentes que se oponían a las operaciones de la mina. A fines del año, no hubo nuevos adelantos en los casos.

Las personas indígenas de las zonas rurales tuvieron oportunidades limitadas de educación y de empleo. De acuerdo con los últimos datos disponibles del informe de 2006, Encuesta Nacional de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística, muchos indígenas son analfabetos, y cerca del 29% no habla español. De acuerdo con el mismo informe, mientras que el niño promedio no indígena de 7 a 17 años de edad tuvo 4,4 años de estudio, los niños indígenas en el mismo intervalo de edades tuvieron un promedio de 3,7 años. Más del 50% de las

mujeres indígenas mayores de 15 años eran analfabetas, y un número desproporcionado de niñas indígenas no asistía a la escuela. De acuerdo con el Ministerio de Educación, 78.117 niños indígenas en edad preescolar y de jardín de niños fueron inscritos en programas de educación bilingüe en español y una lengua indígena.

El Departamento de Pueblos Indígenas del Ministerio de Trabajo, a cargo de investigar los casos de discriminación y de representar los derechos de los indígenas, asesoró a las personas indígenas sobre sus derechos. El Departamento contó con un presupuesto de 60.000 quetzales (\$7.354), y cuatro empleados únicamente para investigar las denuncias de discriminación.

Casi nunca hubo intérpretes disponibles en los tribunales para los procedimientos penales como lo exige la ley, y esto colocó en desventaja a las personas indígenas arrestadas por delitos, ya que a veces, su comprensión del español era limitada. En los 536 juzgados del país, hubo 115 jueces que hablaban lenguas mayas. Hubo 62 intérpretes en los tribunales, incluso 45 personas bilingües mayas, y la Corte Suprema de Justicia informó que el sistema judicial contó con 758 empleados que hablaban lenguas indígenas. No obstante, en muchos casos, se siguió asignando personal judicial bilingüe a lugares donde no se hablaba su segundo idioma.

Abuso social, discriminación y actos de violencia por motivo de orientación e identidad sexual

Los grupos de apoyo de los derechos de homosexuales argumentaron que, periódicamente, los agentes de la policía esperaban fuera de los clubes y bares frecuentados por minorías sexuales y exigían que las personas que participaban en actividades sexuales comerciales les pagaran por protegerlos. La falta de confianza en el sistema judicial y el temor a mayor persecución o recriminación social impidió que las víctimas presentaran denuncias. Hubo discriminación social general contra personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales en el empleo, el lugar de trabajo y la vivienda.

El 29 de septiembre, un tribunal ordenó la suspensión del proceso contra el defensor de los derechos de personas lesbianas, gays bisexuales y transexuales, Jorge Luis López Sologaitoa, Director Ejecutivo de la ONG Organización de Apoyo a una Sexualidad Integral frente al Sida (OASIS), quien fue acusado de agredir a un trabajador sexual en noviembre de 2008.

Otra violencia o discriminación social

La ley no incluye expresamente la situación de VIH/SIDA entre las categorías en las cuales se prohíbe la discriminación, y hubo discriminación social contra personas con VIH/SIDA.

Sección 7. Derechos de los trabajadores

a. El derecho de asociación

Aun cuando la ley dispone la libertad de asociación y el derecho de formar sindicatos y de unirse a ellos para todos los trabajadores con excepción de los miembros de las fuerzas de seguridad, en la práctica, la aplicación siguió siendo débil e ineficaz. La violencia contra sindicalistas y activistas laborales, además de la falta de aplicación suficiente de las leyes del trabajo y el empleo, debilitaron a los sindicatos de trabajadores y limitaron este derecho en la práctica. Sólo el 8% de la fuerza laboral del sector formal estuvo sindicalizado.

El informe oficial que analizó la petición presentada en 2008 en el marco del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos y Centroamérica señaló problemas graves en la aplicación de las leyes laborales. El gobierno tuvo avances muy limitados durante el año en la solución de las deficiencias específicas resaltadas en el informe, y continuaron los problemas sistémicos de aplicación de las leyes.

El Ministerio de Trabajo concedió personalidad jurídica a 72 sindicatos nuevos, en comparación con 53 en 2008. En su mayoría, los nuevos sindicatos eran pequeños y estaban localizados en las provincias, sobre todo en el sector agrícola o municipal. Aunque hubo 2.014 sindicatos laborales legalmente inscritos, a fines del año, 650 parecían estar activos de acuerdo con los registros administrativos de inscripción.

El reconocimiento jurídico de un nuevo sindicato para toda una industria exige que una mayoría del 50% más uno de los trabajadores de esa industria pertenezcan al mismo. La Comisión de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) indicó en su informe anual que el requisito limitó la formación libre de sindicatos.

Al final del año, el "solidarismo" activo (un movimiento nacional de asociación solidaria) afirmó contar con 91 asociaciones afiliadas y cerca de 30.000 miembros. Otras 90 asociaciones independientes no afiliadas aseguraron contar con

cerca de 50.000 miembros más. Los sindicatos pueden operar legalmente en lugares de trabajo que tengan asociaciones solidaristas, y los trabajadores tienen el derecho de decidir pertenecer al sindicato, a la asociación o a ambos.

Los líderes laborales informaron que recibieron amenazas de muerte y que fueron objeto de otros actos de intimidación. Durante el año, la Unidad de Delitos contra Periodistas y Sindicalistas del fiscal especial, dentro de la Fiscalía de Derechos Humanos, aceptó 48 casos nuevos relacionados con sindicatos. La unidad logró 10 fallos condenatorios por delitos contra sindicalistas en el año. El tamaño pequeño de la unidad (dos fiscales a tiempo completo y seis auxiliares fiscales) limitó su eficacia.

La UDEFEGUA informó que, a fin del año, 120 sindicalistas fueron atacados (un aumento del 255% con respecto a los números de 2008 de la UDEFEGUA para esta categoría), y cinco fueron asesinados por agresores desconocidos. En general, fue difícil descubrir los motivos de los asesinatos, ya que, en su mayoría, no fueron bien investigados ni se enjuiciaron. Los sindicatos locales insistieron en que se investigaran los asesinatos de los sindicalistas, y pidieron mayor seguridad para los dirigentes y miembros de sindicatos. El 29 de octubre, la CICIG anunció sus intenciones de investigar los asesinatos de 20 líderes sindicales y campesinos, ocurridos desde 2007.

El 1 de abril, de acuerdo con Amnistía Internacional, hombres desconocidos amenazaron y dispararon contra la casa de Edgar Neftaly Aldana Valencia, secretario general de la sucursal de San Benito del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, quien, según informes, hizo denuncias de la corrupción y la discriminación que existe en el Hospital de San Benito, en Petén.

El 25 de octubre, de acuerdo con la Confederación Sindical Internacional (CSI), agresores desconocidos mataron a Víctor Gálvez, un líder sindical que se manifestó frente al Instituto Nacional de Electrificación.

A pesar de las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, no hubo avances en los siguientes casos pendientes desde 2008:

- El asesinato en marzo del líder laboral Miguel Ángel Ramírez Enríquez, fundador del Sindicato de Trabajadores Bananeros del Sur.

- EL asesinato en abril de Carlos Enrique Cruz Hernández, miembro del Sindicato de Trabajadores Bananeros de Izabal (SITRABI).
- El asesinato en junio de Freddy Morales Villagrán, miembro del Consejo Consultivo del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Distribuidora del Petén.
- El asesinato en agosto de Edvin Portillo, tesorero de la Junta de Administración de Prestaciones y miembro del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Portuaria Santo Tomás.

El 10 de enero, las autoridades arrestaron a Wilfredo Waldemar Valiente García por el asesinato en 2007 de Pedro Zamora, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Portuaria Quetzal. El 12 de noviembre, un tribunal absolvió a Valiente y, según informes, la Unidad de Delitos contra Periodistas y Sindicalistas del Ministerio Público presentó una apelación el 2 de diciembre. Sin embargo, a fines del año, el tribunal de apelaciones no había tomado ninguna decisión sobre el asunto. Siguió prófugo Dremler Fuentes, un segundo sospechoso buscado por este caso.

No se supo de ningún adelanto en los siguientes casos pendientes desde 2007: los asesinatos de los vendedores ambulantes Walter Aníbal Ixcaquic Mendoza y Norma Sente de Ixcaquic, miembros del Sindicato de la 6ª Avenida, afiliado al Sindicato Frente Nacional de Vendedores de Guatemala, y el asesinato de Marco Tulio Ramírez Portela, líder del SITRABI y hermano del Secretario General del SITRABI.

Los trabajadores tienen el derecho de huelga pero, por ley, deben contar con el apoyo del 51% de la fuerza laboral de la empresa. De acuerdo con el Departamento de Estadísticas del poder judicial, debido al bajo nivel de sindicación y a los obstáculos del procedimiento, hubo sólo una huelga legal en el año. No obstante, los maestros, los trabajadores de atención de la salud, los agricultores y otros grupos laborales organizaron y participaron en varias protestas, marchas y manifestaciones durante el año.

La ley otorga facultades al Presidente y a su gabinete para suspender cualquier huelga que se considere "gravemente perjudicial para las actividades y servicios públicos básicos". Los trabajadores de los sectores de servicios básicos y públicos pueden abordar las quejas con mediación y arbitraje, por medio

de la Inspectoría General de Trabajo del Ministerio de Trabajo, y directamente, mediante los tribunales de trabajo. Los empleadores pueden suspender o despedir a los trabajadores por ausentarse sin permiso, si las autoridades no han reconocido que una huelga es legal. La ley exige arbitraje vinculante si no se ha llegado a un acuerdo después de 30 días de negociaciones. La ley prohíbe represalias del empleador contra los huelguistas que intervienen en huelgas legales.

Los grupos laborales organizados protestaron contra los argumentos de seguridad nacional y situación de emergencia que empleó el gobierno para prohibir lo que estos grupos consideraron huelgas "legales". También criticaron los arrestos, los encarcelamientos y la imposición de multas contra los manifestantes, y consideraron estos actos como violaciones de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el derecho de huelga. El informe anual de la Confederación Sindical Internacional (CSI) señaló que los "servicios básicos" fueron interpretados de manera más amplia que lo que la OIT considera justificado, con lo cual se denegó el derecho de huelga a un gran número de trabajadores públicos, como los empleados de educación, servicios postales y transporte, y producción, distribución y transporte de energía.

El informe anual de la CSI concluyó que hubo inspecciones laborales insuficientes, un sistema judicial débil e impunidad. En la encuesta se informó que, según los trabajadores, los inspectores se mostraban más dispuestos a persuadirlos de que renunciaran a sus derechos que a protegerlos, y, con frecuencia, alertaron previamente a los empleadores de sus visitas. Los tribunales de trabajo tuvieron un volumen acumulado de solicitudes para la reincorporación de trabajadores, y los casos podrían tardar más de diez años. Los empleadores tendieron a hacer caso omiso de los fallos de los tribunales, y a su vez, los tribunales no tomaron medidas para garantizar que se respetaran sus decisiones. La misión de asistencia técnica de la OIT en febrero expresó su preocupación respecto a la voluntad de eliminar los obstáculos para la libertad de asociación, y señaló que los problemas de impunidad, eficacia del sistema judicial e implementación de la libertad de asociación necesitaban atención prioritaria.

b. El derecho de organización y negociación colectiva

La ley dispone el derecho de organización y permite a los sindicatos negociar colectivamente. El gobierno trató de proteger ese derecho en la práctica, pero tuvo pocos medios para

hacerlo. La ley exige que los miembros de un sindicato aprueben un acuerdo de negociación colectiva por mayoría simple; sin embargo, el número reducido de trabajadores sindicalizados y las restricciones impuestas a la formación de sindicatos limitaron la práctica de la negociación colectiva. En particular, las restricciones a la formación de sindicatos lograron eliminar la posibilidad de que los trabajadores ejercieran sus derechos de negociar y de hacer participar formalmente a los empleadores a nivel de sector.

De acuerdo con la ley, el propietario de una fábrica o empresa no tiene obligación de negociar un acuerdo de negociación colectiva a menos que el 25% del número total de trabajadores de la fábrica o empresa sean miembros de un sindicato y soliciten las negociaciones. La mayoría de los trabajadores, entre ellos, los organizados en sindicatos, no contaron con contratos colectivos que documentaran sus salarios y condiciones de trabajo, ni con contratos individuales como lo exige la ley. Esto se debió en gran parte a la combinación de sindicatos apoyados por los empleadores, ceses o despidos ilegales de sindicalistas, desacato de las órdenes o los fallos de reincorporación emitidos por los tribunales que exigen que el empleador negocie con los sindicatos reconocidos, y amenazas y manipulaciones dirigidas a trabajadores subcontratados (es decir, amenazas de que no se les renovará un contrato o no se les ofrecerá empleo permanente si el trabajador se afilia a un sindicato o se niega a desafiliarse del mismo).

La ley estipula que los sindicatos tienen el derecho exclusivo de negociar las condiciones de trabajo en nombre de los trabajadores; sin embargo, los sindicatos afirmaron que la gerencia promovió las asociaciones solidaristas para desalentar la formación de sindicatos o para competir con los existentes.

El Ministerio de Trabajo informó que, durante el año, hubo 36 nuevos acuerdos de negociación colectiva, entre ellos, acuerdos negociados con los sindicatos de maestros y trabajadores de atención de la salud. Estos acuerdos se lograron después de años de negociaciones y de numerosas manifestaciones de los maestros en todo el país.

En su informe anual, la Comisión de Expertos se refirió a los problemas crónicos relacionados con el incumplimiento de las órdenes de reincorporar a los sindicalistas despedidos; la lentitud e ineficacia de los procedimientos para imponer sanciones por infracciones a las leyes laborales; y la necesidad

de promover la negociación colectiva, en especial, en las zonas francas industriales.

La ley prohíbe la discriminación contra sindicatos y la interferencia de los empleadores en las actividades de los sindicatos; no obstante, fue débil la aplicación de estas disposiciones, en particular, la aplicación de las prohibiciones legales de castigar la formación de sindicatos y de participar en las actividades de éstos. De forma rutinaria, muchos empleadores trataron de evadir las disposiciones legales para la organización de sindicatos mostrando resistencia a los intentos de formación de sindicatos o haciendo caso omiso de las órdenes judiciales de ejecución de dichas disposiciones. La insuficiencia de penalización por infracciones y un sistema jurídico ineficiente para hacer cumplir las sanciones siguieron minando el derecho de negociación colectiva y de participación en actividades sindicales. Otro factor fue la decisión de la Corte de Constitucionalidad en 2004 acerca de que el Ministerio de Trabajo no tiene la autoridad para imponer sanciones por infracciones de las leyes laborales.

Los sindicatos locales informaron que hubo mayor incidencia de declaraciones fraudulentas de bancarrota, sustitución de titularidad y nuevo registro de empresas realizados por empleadores que buscaban evadir las obligaciones legales de reconocer los sindicatos recién formados o ya establecidos. Las instituciones gubernamentales siguieron tolerando esas prácticas. La demora en el trámite de denuncias legales, desde su presentación hasta su resolución definitiva, se tradujo en inmunidad para los empleadores.

Hubo informes fidedignos de represalias de los empleadores contra los trabajadores que intentaron ejercer los derechos laborales. Las prácticas comunes incluyeron despido y hostigamiento de los trabajadores que intentaron formar sindicatos en el lugar de trabajo; creación de sindicatos ilegales apoyados por la empresa para hacer frente a los sindicatos legalmente establecidos; colocación de los organizadores de sindicatos en listas negras; amenazas de cierre de fábricas; denegación de permiso a los inspectores de trabajo para ingresar en las instalaciones a investigar las quejas de los trabajadores; y el rechazo a cumplir las decisiones tomadas por los tribunales de trabajo en favor de los trabajadores, entre ellas, la reincorporación de los organizadores de sindicatos injustamente despedidos.

De acuerdo con la CSI, desde enero, 60 miembros del sindicato de trabajadores municipales de Zaragoza fueron despedidos por "formar una organización sindical". Su despido coincidió con el nombramiento de nuevos miembros del consejo municipal.

La ley exige que los empleadores reincorporen a los trabajadores que hayan sido despedidos ilegalmente a causa de sus actividades en la organización de sindicatos. En la práctica, hubo incumplimiento frecuente de los empleadores de las órdenes de reincorporación. Durante el año, los trabajadores afectados por despidos ilegales ganaron 284 mandatos judiciales de reincorporación. Las apelaciones presentadas por los empleadores, junto con el uso de recursos legales como la reconstitución de la empresa como una entidad distinta, demoraron a menudo los procesos de reincorporación. Los tribunales de trabajo sobreseyeron los casos o las apelaciones insustanciales en contadas ocasiones, no actuaron de manera oportuna ni garantizaron la ejecución de sus decisiones. De acuerdo con funcionarios del Ministerio de Trabajo, en casos inusuales, las autoridades sancionaron a los empleadores por hacer caso omiso de órdenes judiciales legalmente vinculantes. Con frecuencia, los empleadores no pagaron los montos totales de las indemnizaciones por cesantía de los trabajadores como lo exige la ley.

Los tribunales de trabajo, no los inspectores de trabajo, tienen la responsabilidad de sancionar a los empleadores que infringen las leyes laborales. Durante el año, los tribunales de trabajo recibieron 8.606 casos de la Inspectoría General de Trabajo. Sin embargo, las decisiones de los juzgados favorables a los trabajadores fueron ejecutadas muy pocas veces debido a que los empleadores se rehusaron con frecuencia a acatar esas decisiones. Según informes, la gerencia o las personas contratadas por la gerencia siguieron hostigando y amenazaron de muerte a los trabajadores que no aceptaron el despido del empleador o que se negaron a perder su derecho a la reincorporación.

No hubo leyes especiales ni exenciones de las leyes laborales ordinarias en las 16 zonas francas industriales activas ni dentro de las fábricas de vestuario que funcionaban según un régimen similar al de estas zonas. Debido a la aplicación insuficiente de las leyes laborales y a las medidas ilegales adoptadas a menudo por los empleadores para evitar la formación de nuevos sindicatos o para minar los sindicatos existentes, hubo pocos logros en la organización de los trabajadores en las zonas francas industriales y en el sector de vestuario. Algunas fábricas cerraron y volvieron a abrir con un nuevo nombre y un

nuevo estado de exención fiscal. De las 216 compañías que operaban en las zonas francas industriales, sólo dos reconocieron los sindicatos y ninguna contó con acuerdos de negociación colectiva. El gobierno no llevó a cabo inspecciones de trabajo periódicas en las zonas francas industriales, y hubo infracciones sistémicas de las leyes sobre salarios y horarios, horas extras trabajadas de manera obligatoria sin pago adicional, despidos de los trabajadores que intentaron formar sindicatos, retención de pagos del seguridad social y pruebas ilegales de embarazo. Las observaciones de la Comisión de Expertos en 2008 señalaron como problema la exigencia de pruebas de embarazo en algunos lugares de trabajo, como condición para obtener y conservar el empleo.

c. Prohibición de trabajo forzado u obligatorio

La Constitución y las leyes prohíben el trabajo forzado u obligatorio; no obstante, hubo trata de hombres, mujeres y niños en el país con fines de trabajo forzado, especialmente, en la agricultura. En la zona de la frontera con México, se explotó a los niños forzándolos a pedir limosna en las calles y a trabajar en las plantaciones de café y en los basureros municipales. Los grupos laborales organizados compararon las prácticas de tiempo extra obligatorio con el trabajo forzado u obligatorio. Estas prácticas fueron comunes en el sector privado, especialmente en los sectores de exportación.

d. Prohibición del trabajo infantil y la edad mínima para el empleo

La ley prohíbe el empleo de menores de 14 años sin el permiso por escrito de los padres o del Ministerio de Trabajo; sin embargo, el trabajo infantil fue un problema generalizado. La ley prohíbe a los menores de 18 años trabajar en lugares donde se sirven bebidas alcohólicas, en condiciones insalubres o peligrosas, y en turnos de noche o de horas extras. La jornada de trabajo legal para los menores de 14 años es de seis horas; y para los menores de 14 a 17 años, de siete horas. A pesar de estas protecciones, los niños trabajadores laboraron en promedio más de 45 horas a la semana.

La mayor parte del trabajo infantil tuvo lugar en las zonas indígenas rurales donde la necesidad económica ha forzado a los niños a complementar el ingreso familiar. Los sectores agrícola e informal emplearon periódicamente a menores de 14 años, a menudo, en pequeñas empresas familiares, y hubo informes durante el año de casos de trabajo infantil en el cultivo de brócoli,

café, maíz y azúcar, y en la producción de fuegos artificiales y grava.

Los niños, principalmente las niñas indígenas, trabajaron como empleadas domésticas expuestas a maltrato físico y abuso sexual. A menudo, los niños indígenas trabajaron como vendedores ambulantes, en la producción de caucho y madera, y como limpiabotas y ayudantes de albañilería. Hubo informes de trabajo infantil forzado en los basureros municipales y en las calles como limosneros.

La Unidad de Protección al Menor Trabajador del Ministerio de Trabajo tiene la responsabilidad de hacer cumplir las restricciones al trabajo infantil y de educar a los menores, a sus padres y a los empleadores acerca de los derechos de los menores en el mercado laboral. El gobierno no hizo cumplir eficazmente las leyes que rigen el empleo de menores, y esto agravó la debilidad de los sistemas de inspección laboral y de los tribunales de trabajo. En casos excepcionales, la Inspectoría General de Trabajo puede autorizar a los niños menores de 14 años para trabajar; sin embargo, el Ministerio de Trabajo se ha comprometido a no conceder estas autorizaciones, siguiendo el convenio correspondiente de la OIT. Para mantener este compromiso, la Inspectoría General de Trabajo informó que no concedió ninguna autorización de este tipo durante el año.

En sus observaciones de marzo, la Comisión de Expertos expresó profunda preocupación por la situación de los menores de 14 años obligados a trabajar en el país, señaló que parecía muy difícil aplicar en la práctica las leyes nacionales sobre trabajo infantil y alentó al gobierno a intensificar sus esfuerzos por mejorar la situación de los trabajadores menores de 14 años.

El gobierno destinó recursos insuficientes a los programas de prevención, pero el gobierno municipal de la Ciudad de Guatemala gestionó varios programas pequeños que ofrecieron becas y alimentos gratuitos para animar a las familias a enviar a la escuela a los niños que anteriormente habían trabajado en las plantaciones de brócoli y café, y en la producción de grava y de fuegos artificiales.

e. Condiciones aceptables de trabajo

La ley fija un salario mínimo nacional para el trabajo agrícola y no agrícola, y en las fábricas de vestuario. El 29 de diciembre, el presidente Colom aumentó el salario mínimo diario a 56 quetzales (\$6,86) por día de trabajo en los sectores

agrícola y no agrícola, y a 51,75 quetzales (\$6,34) por día de trabajo en las fábricas de vestuario. El Presidente aumentó el salario mínimo por medio de una orden presidencial, después de que una comisión tripartita integrada por representantes del gobierno, sindicatos y el sector privado no llegó a ningún acuerdo sobre el aumento anual, el cual debe fijarse antes de fin de año.

El salario mínimo no proporcionó un nivel de vida decente para un trabajador y su familia. El Instituto Nacional de Estadística calculó que el presupuesto mínimo de alimentos para una familia de cinco personas era de 1.897,32 quetzales (\$232,54) al mes, casi 4% menos que en 2008. Los representantes laborales señalaron que, aun en los casos en que el padre y la madre trabajan, el salario mínimo no permitió a la familia cubrir sus necesidades básicas.

El Ministerio de Trabajo realizó inspecciones para vigilar el cumplimiento de las disposiciones sobre el salario mínimo, pero el gobierno no asignó recursos suficientes para que los inspectores pudieran aplicar la ley de forma adecuada, especialmente, en el vasto sector informal. El incumplimiento de las disposiciones sobre el salario mínimo en el sector informal fue generalizado. Los grupos de defensa dedicados a los problemas del sector rural estimaron que más de la mitad de los trabajadores en las zonas rurales con empleos de jornada completa no recibieron los salarios, las prestaciones ni las asignaciones de seguridad social que exige la ley. Según cálculos confiables, entre el 65 y el 75% de la fuerza laboral siguió trabajando en el sector informal y fuera de las medidas de protección básica que concede la ley.

La semana de trabajo legal es de 48 horas con un período mínimo de descanso pagado de 24 horas, aunque en ciertos sectores económicos, los trabajadores siguieron trabajando conforme a la tradición de más horas de trabajo. Los límites máximos de horas diarias y semanales no se aplicaron a los empleados domésticos. Se exige el pago de tiempo y medio para el trabajo realizado en tiempo extra. Aun cuando la ley prohíbe las horas extras excesivas obligatorias, los dirigentes sindicales y los grupos de derechos humanos denunciaron que los empleadores obligaron a los trabajadores a laborar tiempo extra sin el pago adicional que exige la ley. La gerencia manipuló con frecuencia el transporte proporcionado por la empresa, con el fin de obligar a los empleados a trabajar horas extras, especialmente en las zonas francas industriales ubicadas en lugares aislados con pocas alternativas de transporte. Los inspectores de trabajo

informaron haber descubierto varios casos de abusos relacionados con el tiempo extra; sin embargo, la debida aplicación de las disposiciones se vio minada por multas insuficientes, la ineficiencia de los tribunales de trabajo y la negativa de los empleadores a permitir la entrada de inspectores de trabajo en sus instalaciones o a proporcionar acceso a los archivos de nómina y otra documentación. Además, los inspectores de trabajo no contaron con facultades para adoptar medidas administrativas o imponer multas, sino que tuvieron que enviar las supuestas infracciones a los tribunales de trabajo donde las decisiones que favorecían a los trabajadores se aplicaron en muy pocos casos.

El Ministerio de Trabajo puso en operación un centro de llamadas que recibió 44.767 denuncias laborales o solicitudes de información y asesoramiento durante el año. Los sindicatos locales siguieron destacando y protestando contra las infracciones cometidas por los empleadores que no pagaron sus propias contribuciones ni las de los empleados al sistema nacional de seguridad social, a pesar de las deducciones hechas de los cheques de pago de los empleados por concepto de contribuciones del empleado. Las infracciones, particularmente comunes en las industrias del sector privado y de exportaciones, llevaron a limitar o a denegar el acceso de los empleados al sistema de salud pública, y a reducir o a pagar menos prestaciones por concepto de pensiones de los trabajadores durante sus años de jubilación.

El gobierno establece las normas de salud y seguridad en el trabajo, las cuales fueron insuficientes y mal aplicadas. Cuando hubo accidentes industriales graves o mortales, las autoridades dejaron a menudo de investigarlos totalmente o no asignaron responsabilidad por negligencia. Los empleadores fueron sancionados muy pocas veces por no ofrecer condiciones de trabajo seguras. No se hizo cumplir la ley que exige a las empresas que tienen más de 50 empleados contar en el lugar con instalaciones médicas para sus trabajadores. Los trabajadores tienen el derecho legal de retirarse de situaciones de trabajo peligrosas sin temor a represalias. Sin embargo, pocos trabajadores estuvieron dispuestos a arriesgar sus empleos debido a quejas acerca de condiciones de trabajo inseguras.